



**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

## **TRABAJO FIN DE GRADO**

### **GRADO EN DERECHO**

**Departamento: Derecho Administrativo, Financiero y Procesal**

**Área de conocimiento: Derecho Procesal**

**Curso 2019/2020**

# **EL PROCESO PENAL DE MENORES**

Estudiante: Andrea Serrano Carrasco

Tutora: Isabel Huertas Martín

Junio de 2020

# **TRABAJO FIN DE GRADO**

## **GRADO EN DERECHO**

Departamento: Derecho Administrativo, Financiero y Procesal

Área de conocimiento: Derecho Procesal

### **El proceso penal de menores**

(Especial referencia a la mediación penal entre el menor infractor y la víctima)

### **Spanish juvenile justice system**

(Special reference to criminal mediation between the minor offender and the victim)

Estudiante: Andrea Serrano Carrasco

e-mail: [id00716536@usal.es](mailto:id00716536@usal.es)

Tutora: Isabel Huertas Martín

## RESUMEN

El presente trabajo va enfocado a conocer y valorar los cambios y mejoras que se han ido produciendo a lo largo de los años dentro del ámbito del proceso penal de menores: desde un pensamiento totalmente punitivo para responder ante aquellos actos tipificados como delito que se llevan a cabo por menores, a cambiar esa visión buscando soluciones orientadas a fines educativos y resocializadores con una regulación específica donde el procedimiento, sanciones, fines y objetivos están inspirados en dar una solución menos represiva a ese menor infractor.

Bajo mi punto de vista, el tema a tratar (llevando a cabo un análisis del proceso penal de menores como tal) debido a su importancia no es un tema baladí, ya que esto nos permite mejorar y avanzar a nivel humanitario y en el ámbito de la justicia, lo cual en ocasiones no es muy aceptado por la sociedad debido a que estas soluciones se entienden como una respuesta débil del sistema ante aquellos que delinquen, sin tener en cuenta que hablamos de menores, los cuales muchos están en disposición plena para poder reintegrarse por completo en la sociedad, y como Estado debemos proporcionarles esa oportunidad de tener una vida digna con todo lo que eso significa en un futuro. De ahí que el objeto de este trabajo sea el proceso penal de menores (regulado en nuestra LO 5/2000) y dentro de ella, otorgándole especial importancia a la mediación como alternativa para conseguir estos fines.

**PALABRAS CLAVE:** Interés superior del menor; principio de oportunidad; LO 5/2000; Justicia restaurativa; Mediación.

## ABSTRACT

The present work is focused on knowing and assessing the changes and improvements that have been taking place over the years within the field of juvenile criminal proceedings: from a totally punitive thinking to respond to those acts classified as crimes carried out by minors, to change that vision by seeking solutions oriented to educational and re-socializing purposes with the regulation of special laws where the procedure, sanctions, aims and objectives are inspired to give a less repressive solution to that minor offender.

In my view, the issue to be addressed due to its importance is not a trivial one, since this allows us to improve and advance at a humanitarian level and in the field of justice, which sometimes is not very accepted by society because these solutions are understood as a weak response of the justice system to those who offend without taking into account that we are talking about minors, many of whom are in full capacity to be able to fully reintegrate into society and as a State we must provide them with that opportunity to have a dignified life with all that that means in the future. That is why the object of this work is the penal process of minors (regulated in our LO 5/2000) and within it we are giving special importance to mediation as an alternative to achieve these ends.

**KEYWORDS:** Superior interest of the minor; Principle of opportunity; OL (organic law) 5/2000; Restorative justice; Mediation

## **ÍNDICE**

<b>1. MARCO TEÓRICO.....</b>	<b>5</b>
1.1 Antecedentes jurídicos de la LORPM.....	5
1.2 Reformas legislativas aplicadas a la LORPM.....	7
<b>2. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA LO 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. ...</b>	<b>10</b>
2.1.1 Interés superior del menor. ....	12
2.1.2 El principio de oportunidad en el proceso penal de menores. ....	15
<b>3. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO PENAL DE MENORES... 17</b>	
<b>4. JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL PROCESO DE MENORES.....</b>	<b>24</b>
4.1 Mediación, Conciliación y Reparación a la luz de la LORPM. ....	26
4.2 La mediación en la LO 5/2000 y el Reglamento. Principios.....	28
<b>5. FUNDAMENTO Y OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN PENAL JUVENIL.....</b>	<b>30</b>
5.1 El perfil del mediador.....	31
5.1.1 El Equipo Técnico. ....	32
5.1.2 La figura del Equipo Técnico en la mediación. ....	32
5.1.3 Actuaciones del Equipo Técnico en cuanto al procedimiento de mediación.....	34
5.2 Etapas del procedimiento.....	37
5.2.1 Etapas del procedimiento en relación con el principio de oportunidad.....	39
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>42</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>46</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>62</b>
<b>Otros documentos consultados .....</b>	<b>66</b>

## 1. MARCO TEÓRICO.

La nota más significativa del Derecho penal y procesal de menores es que se trata de un sector del ordenamiento jurídico que únicamente se dirige a aquellos menores de edades comprendidas entre los catorce y los dieciocho años y para su aplicación, es necesario que estos hayan cometido un delito (similitud con el derecho penal de adultos), pero en este caso al sujeto no se le aplicará una pena sino una medida cuyo carácter principal es que va a ser educativa. Esta se adoptará en atención a las circunstancias y caso concreto en el que se encuentre ese menor (atendiendo a su interés superior).

Por todo lo dicho, el derecho penal de menores puede definirse según COLÁS TURÉGANO como: *“un conjunto de normas jurídicas positivas que asocian a la comisión de una infracción penal por un menor de edad, una serie de medidas caracterizadas por su contenido educativo, dirigidas al superior interés del menor”*<sup>1</sup>.

En derecho comparado se fija como criterio para determinar la responsabilidad penal de estos menores el criterio de discernimiento, a través del cual se fijan las edades que luego plasman en las distintas legislaciones (a diferencia del sistema penal español) y a partir de las cuales los menores pueden responder penalmente. Pudiendo puntualizar también que podemos encontrar diferencias en la aplicación del régimen sancionador que rige respecto a los menores, en los distintos Estados (véase anexo I).

### 1.1 Antecedentes jurídicos de la LORPM.

Como antecedentes jurídicos a la que es nuestra legislación actual vigente en materia del proceso penal de menores, deberíamos de hacer mención a los siguientes<sup>2</sup>:

- a. En relación con la Legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores de 11 de junio 1948 nos encontrábamos ante tribunales administrativo-jurisdiccionales en los que se admitía la opción de que estos estuvieran formados por personas que fueran ajenas a

---

<sup>1</sup> COLÁS TURÉGANO, A. *Derecho Penal de Menores*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 50.

<sup>2</sup> SANCHO VERDUGO, R., “Consideraciones criminológicas sobre la Ley Orgánica N.5, de 12 de enero de 2000, reguladora de la Responsabilidad penal de los menores”, *En Anuario de Justicia de Menores*, Ed. Astigi (No. IV), España, 2004, pp. 82, 83 y 84.

la carrera judicial. Este dependía del Consejo Superior de Protección de Menores, dependiente a su vez del Ministerio de Justicia<sup>3</sup>.

- b. Con la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estos últimos fueron sustituidos por los Juzgados de Menores, y pasan a formar parte de la jurisdicción ordinaria. Los jueces de menores contaban dentro de sus competencias, con potestad jurisdiccional en virtud del art. 26 de la presente ley y a su vez según el art. 97 de la misma: *“el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes”*.
- c. Tenemos que hacer mención a la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, por la que se declara nulo el art. 15 de la Legislación sobre Tribunales de Menores por no contener las reglas procesales vigentes respecto al proceso de menores. Del mismo modo que no respetaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la Convención de los Derechos del Niño de 1989<sup>4</sup>. Es decir, este art. 15 no respetaba las garantías procesales mínimas a seguir en un proceso.

Como consecuencia de ello se promulga la LO 4/1992, de 5 de junio, en la que se da lugar a un procedimiento más flexible, donde los Juzgados de Menores pueden adoptar las medidas que se consideren más adecuadas a la hora de valorar el interés del menor y asegurar esas garantías durante el proceso<sup>5</sup>.

En opinión de MIR PUIG y en relación con la promulgación de la LO 4/1992 (la cual consideraba al menor de doce años totalmente inimputable) llama la atención la manera en la que se prevé una fase intermedia entre la minoría de edad penal y la mayoría plena como aspecto del ámbito subjetivo de aplicación de esta normativa. La aproximación al conocido como “Derecho penal juvenil” se debe a la situación existente en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo ocurre en Alemania

---

<sup>3</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral). Universidad Complutense, Madrid, 2010, p. 65, disponible a 03/06/2020 en <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/PDF%20Doctorado%20de%20la%20complutense.pdf>

<sup>4</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 65.

<sup>5</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 66.

con los mayores de dieciocho años, pero menores de veintiuno en ciertos casos en los que se demuestre que su madurez personal no corresponde con lo que podríamos esperar de una persona con un desarrollo pleno de su madurez<sup>6</sup>.

- d. Haciendo mención también a la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, anterior a la actual normativa vigente, como novedad no se realiza ninguna reforma, sino que se preveía ampliar la extensión de la planta de los Tribunales y Juzgados de Menores con el número exacto de sesenta y tres juzgados y que con la entrada de la LO 5/2000 solo contábamos con una planta de treinta ocho Juzgados de Menores<sup>7</sup>.

A toda esta normativa y la problemática de la misma, habría que sumarle la preocupación internacional que surge por la justicia de menores (a partir de la segunda mitad del siglo XX), y como consecuencia contamos con numerosos instrumentos normativos incidentes en este ámbito; normativa que también pasaremos a mencionar y analizar brevemente a lo largo del trabajo<sup>8</sup>.

Ya finalmente, con la promulgación del Código Penal de 1995 se establece la minoría de edad penal en los dieciocho años. Es decir, se fija un límite de edad a aquellos hechos tipificados penalmente como delito que lleguen a cometerse por estos individuos (menores de 18 años), los cuales van a remitirse a una ley específica que va a pasar a regular la responsabilidad penal de los menores y que actualmente conocemos como la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante LORPM).

## 1.2 Reformas legislativas aplicadas a la LORPM.

A continuación, pasamos a enumerar y analizar brevemente cada una de las reformas legislativas que se han ido llevando a cabo a lo largo de los años:

- a. **Reforma LO 7/2000 de 22 de diciembre:** esta reforma fue realizada incluso antes de que entrara en vigor la propia LO 5/2000. Para ponernos en contexto, la sociedad

---

<sup>6</sup> MIR PUIG, S. *Derecho Penal. Parte General*, 8a ed., Ed. Reppertor, Barcelona, España, 2006, p. 590.

<sup>7</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 66.

<sup>8</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 67.

estaba viviendo momentos de auge en lo que respecta a la actividad terrorista y la violencia callejera, conocida como Kale Borroka<sup>9</sup>.

Debido a estos acontecimientos, en la Disposición Adicional Cuarta de la ley se produce un endurecimiento en relación a los menores que cometan tipos delictivos como puede ser el terrorismo, homicidios, asesinatos, o cualquier tipo de delito que en nuestro Código penal estuviere tipificado con una pena igual o superior a 15 años.

Aquí ya podemos observar cómo el interés del menor, su educación y formación pasan a un segundo plano respecto de la finalidad retributiva y preventivo general que caracteriza más el proceso penal dirigido a los adultos<sup>10</sup>.

Además, se elevaron los límites superiores del internamiento en régimen cerrado provocando una quiebra del principio de flexibilidad, se incluyen periodos de seguridad para el cumplimiento de las medidas que no podrán ser objeto de modificación; y como novedad también encontramos la medida de inhabilitación absoluta (que también carece de contenido educativo) y se crea el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional para conocer de los delitos de terrorismo<sup>11</sup>.

- b. **Reforma LO 9/2000 de 22 de diciembre:** de manera sucesiva y también antes de la entrada en vigor de la LO 5/2000 se suprimen las Salas de Menores de los TSJ (Tribunales Superiores de Justicia), los cuales se caracterizaban por ser órganos especiales con competencias para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de los Juzgados de Menores, ahora pasarán a conocer de esos recursos las Audiencias Provinciales de forma genérica<sup>12</sup>.

Otra de las modificaciones que se realizan es que se deja en suspenso la aplicación del art. 4 de la LORPM donde se regulaba la posibilidad de aplicar este régimen a aquellos que se encontraran en el periodo de edad entre los dieciocho a veintiún años.

---

<sup>9</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado). Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2014, p. 14, disponible a 08/04/2020 en <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFG%20sobre%20la%20evolucion%20de%20la%20LORPM.pdf>

<sup>10</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 15.

<sup>11</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 15.

<sup>12</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 15.



- c. **Reforma LO 9/2002 de 10 de diciembre:** no se produce ninguna modificación respecto al texto legal, pero se fija la fecha hasta la que se dejará en suspenso lo regulado en el art. 4 de la ley antes citada: hasta el 1 de enero de 2007.
- d. **Reforma 15/2003 de 25 de noviembre:** en esta reforma se modifica la forma de intervención de las personas que han sido directamente perjudicadas u ofendidas por el ilícito cometido por el menor infractor. En el texto original la intervención de la víctima era limitada y tras la reforma se introduce la figura de la acusación particular.

Esta reforma también será objeto de análisis de este trabajo, por lo que podemos directamente determinar en este apartado que dicha modificación no favorece al interés superior del menor. Con esta reforma se pretende utilizar el Derecho penal para resarcir a la víctima, ya que esta puede oponerse a las medidas que el fiscal ha determinado en interés de dicho menor, dificultado también por otro lado (si fuera el caso) la conformidad entre las partes<sup>13</sup>.

Aun así, con la participación limitada establecida antes de la reforma, no se estaba limitando los derechos de la víctima en el proceso, ya que se le permitía intervenir en las actuaciones que tuviesen que ver con los hechos por los que han sido perjudicados<sup>14</sup>.

- e. **Reforma LO 8/2006 de 4 de diciembre:** en esta reforma se llevan a cabo las siguientes modificaciones: se amplían los casos en los que se puede imponer como medida el internamiento en régimen cerrado (art. 9), se amplía el periodo de duración de las mismas (art. 10), se suprime definitivamente el art. 4 antes mencionado (así regulado en su exposición de motivos), como medida cautelar se incorpora la imposibilidad de aproximación del menor infractor a la víctima (art. 7.7 letra i), además de la posibilidad de una vez cumplido los dieciocho años, dicho menor siga cumpliendo la medida en un centro penitenciario (también así reconocido en la exposición de motivos) y por último, reforzar los derechos de la víctima, reconociendo y atendiendo a los mismos.

---

<sup>13</sup> OLAIZOLA NOGALES, I., “La medida de internamiento en régimen cerrado en la LORPPM ¿estamos ante un Derecho penal de seguridad?”, *Revista penal* n° 31, 2013, p. 193.

<sup>14</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 16.

Es decir, la LO 8/2006 reforma 45 artículos de la ley anterior, con el ánimo de corregir fallos que se han suscitado en la práctica, así como suprimir la sensación de impunidad de los delitos más cometidos por menores<sup>15</sup>.

## **2. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA LO 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.**

Con la promulgación de la LO 5/2000, en concreto en su exposición de motivos, se nos informa de una serie de principios necesarios para el cumplimiento y protección de los valores y finalidades de dicha ley:

- a. **Naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y las medidas aplicables.** El camino a seguir por esta normativa se basa en tratar de ver y solucionar cuáles son los hechos o motivos que han llevado al menor a delinquir, bien sea por falta de educación, por pertenecer a un entorno conflictivo (en el ámbito familiar o social); ya que al fin y al cabo no dejamos de hablar de niños, menores de edad, que siempre puede ser rescatados y “encaminados” en otros valores proporcionándoles las herramientas necesarias para seguir adelante, cambiando su posible visión de futuro e ir más allá del simple objeto del castigo<sup>16</sup>. Resocialización a la que se hace mención en el art. 55 de la ley para una mayor seguridad a nivel social (para la comunidad).
- b. **Finalidad preventivo-especial.** Alejándose así de lo estipulado y regulado en la normativa para adultos, dándole proporcionalidad al tratamiento de menores en el aspecto antes mencionado. Es decir, si las penas impuestas a un adulto por la comisión de algún ilícito penal se las imponemos a un menor, no van a cumplirse ninguno de los objetivos o finalidades que se pretenden conseguir con la aparición de esta ley (LO 5/2000)<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 21.

<sup>16</sup> BLANCO BAREA, J.A., “Responsabilidad penal del menor: principios y medidas judiciales aplicables en el Derecho Penal español”, *Revista de Estudios Jurídicos*, Núm. 8, 2008, p. 9, citado por JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 12.

<sup>17</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 12.

- c. **Derecho a todas las garantías para un debido proceso (considerando la necesidad de atender al interés superior del menor)**<sup>18</sup>. Pasamos a hacer mención en primer lugar a lo que conocemos como principio acusatorio en virtud de lo recogido en el art. 8 LORPM. En este sentido MONTAÑÉS PARDO señala que: *“no puede haber juicio sin previa acusación, que esta se ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que entre la acusación y la condena exista correlación, de tal forma que no se puede condenar por hechos distintos de los que ha sido objeto de la acusación, ni por delito más grave ni por circunstancias agravantes respecto del mismo”*<sup>19</sup>.

Por otro lado, hacemos mención del derecho de defensa recogido en el art. 1.2 de la ley en el que se citan los derechos que deben de asistir al menor a lo largo del proceso, junto con la presunción de inocencia regulada en nuestro ordenamiento en referencia a que nadie puede ser condenado siempre y cuando no se demuestre su culpabilidad. Por último, el derecho a un juez imparcial del art. 24.2 como una de las garantías que aparecen reguladas en nuestra Constitución y en el art. 2 LORPM.

- d. **Flexibilidad a lo largo del proceso de menores para la adopción y ejecución de las medidas.** Flexibilidad que permite atender a las circunstancias del caso concreto y a la mejor opción para una posible evolución del menor en su conducta<sup>20</sup>.
- e. **El protagonismo del Ministerio Fiscal en el proceso penal de menores.** Al Ministerio Fiscal se le posibilita la capacidad de apreciar la conveniencia o no de ejercer la acción penal, para ello hacemos mención del art. 18 LORPM para desistir por parte del Ministerio Fiscal de la incoación del expediente en determinados supuestos, del art. 19 LORPM para el sobreseimiento por conciliación o reparación, del art. 32 para el sobreseimiento por conformidad y del art. 40 LORPM sobre la suspensión de la ejecución del fallo<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 12.

<sup>19</sup> MONTAÑÉS PARDO, M.A., *Las garantías constitucionales del proceso penal: el principio acusatorio*, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional 21/2001, Pamplona, 2001, p. 2, disponible a 10/06/2020, en <https://es.slideshare.net/lancadiz/las-garantias-constitucionales-del-proceso-penal-el-principio-acusatorio-1>

<sup>20</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 13.

<sup>21</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 13.

La instrucción del proceso se lleva a cabo de por el Ministerio Fiscal y puede hacerse mención del Equipo Técnico en cuanto a que en dicha fase puede desarrollar labores de colaboración con este último. Esta es una de las novedades y principios inspiradores del proceso penal de menores, ya que en ningún otro proceso va a instruir el fiscal y la figura del Equipo Técnico es propia de este proceso.

- f. **Competencia de las entidades públicas autonómicas para supervisar el cumplimiento de la ejecución de las medidas impuestas y protección de los menores.** Dentro de este principio veo necesario hacer hincapié en la formación y especialización que se requiere y que es necesario para todo aquel personal que llegue a formar parte de lo que supone llevar adelante un proceso penal de menores (jueces, fiscales, equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.)<sup>22</sup>.

#### 2.1.1 Interés superior del menor.

En cuanto a la necesidad de tener una visión general respecto del proceso penal de menores y qué principios o factores intervienen de manera necesaria en el mismo y en sus resoluciones por parte de los jueces competentes, tenemos que detenernos en primer lugar en analizar y reflexionar sobre lo que en nuestro ordenamiento jurídico conocemos como el interés superior del menor desde el punto de vista penal y procesal penal.

El principal objeto de análisis es un concepto fundamental en nuestro sistema de justicia penal del menor, de nuestro texto vigente actualmente (Ley 5/2000, de 12 de enero, de la responsabilidad penal de los menores) y de las leyes precedentes a esta (las cuales han sido objeto de varias reformas), así como el Reglamento que desarrolla la misma (Real Decreto 1774/1004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores) y podemos llegar a la conclusión de que este principio debe regir de modo muy destacado durante todo el proceso, sobre todo en el momento de adoptar una decisión por parte del órgano jurisdiccional.

Podemos hablar de este principio como un principio general del derecho penal y procesal de menores, ya que se afirma la cuestión de que el interés superior del menor es

---

<sup>22</sup> JIMÉNEZ LAÍNEZ, C., *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor* (Trabajo de Fin de Grado), cit., p. 13.

una de las finalidades que se pretenden cumplir en el derecho positivo español, y en concreto respecto del sistema penal juvenil<sup>23</sup>.

Sin embargo, no podemos olvidar que, en cualquier ordenamiento de nuestro entorno, en su derecho penal, se intenta conseguir un control social considerado como necesario respecto de esas conductas tipificadas y contrarias a la ley. Nuestra LORPM establece que si se lleva a cabo por parte de un menor un hecho constitutivo de delito, el art. 7.1 de la misma, establece una serie de medidas reguladas de manera expresa donde el órgano jurisdiccional competente podrá llevar a cabo la imposición de la medida que atentamente considere conveniente, pero principalmente los hechos cometidos por el menor infractor y tipificados como delito en nuestro Código penal, deben de ser valorados, estudiados y resueltos a través de la solución más favorable desde un punto de vista general y en concreto, con la solución más adecuada y efectiva para el menor infractor. (véase las medidas reguladas en dicho art. 7 LORPM en el anexo II)

Por tanto, el interés superior del menor funcionará como un límite a dicha actuación por parte del Estado y dicho interés superior deberá ser atendido a la hora de interpretar las normas aplicables en el caso concreto, atendiendo a las circunstancias que rodean a cada menor<sup>24</sup>.

Es un principio que el intérprete de la norma en ese momento tiene la obligación de conocer y respetar, sin perjuicio de que pueda ser derrotado por otros principios que, en su caso, su aplicación sea más beneficiosa para la finalidad del proceso (art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989)<sup>25</sup>.

Como en cualquier situación donde tiene lugar un conflicto de intereses, habrá que delimitar en cada caso, cuál de los objetivos (si el de prevención o el del interés del menor) ha de considerarse preferente; ante esta situación debemos añadir y hacer mención a que todo esto tiene que atender a la aplicación del principio de proporcionalidad, es decir, debemos de tener en cuenta que el menor es mucho más susceptible de un tratamiento

---

<sup>23</sup> PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “El principio del interés del menor en derecho penal: Una visión crítica”, *Revista de derecho penal y criminología*, 2013, p. 158.

<sup>24</sup> PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “El principio del interés del menor en derecho penal: Una visión crítica”, *cit.*, p. 161.

<sup>25</sup> RIVERO HERNÁNDEZ, F., *El interés del menor* (2ª Edición), Ed. Dykinson, Madrid, 2007, p. 33.

resocializador, (tiene más posibilidades/facilidades de poder educarse, formarse, reintegrarse) si este es objeto de una decisión menos aflictiva<sup>26</sup>.

Considero que por todo lo dicho es importante reflexionar sobre la determinación del interés del menor por parte de los aplicadores del derecho, darle un contenido a ese principio para saber delimitarlo, aplicarlo y tenerlo en cuenta. Pues bien, cuando un órgano del Estado (bien sea el Ministerio Fiscal, bien el juez) determine el contenido del mismo, ha de tener en consideración exclusivamente: la preservación del menor y el desarrollo de sus propios planes de vida junto con el desarrollo futuro de su autonomía, como factores verdaderamente importantes<sup>27</sup>.

Atendiendo a cuestiones procesales, la determinación del principio del interés superior del menor es necesario y obligatorio en todo proceso y debe valorarse atendiendo a las circunstancias específicas del mismo: tanto para dictar las resoluciones judiciales, como para la fase de aportación y valoración de pruebas<sup>28</sup>. Es decir, ver y determinar qué puede y qué no puede ser valorado en atención al interés del menor.

Además de lo expuesto hasta ahora, se considera de especial relevancia el hecho de que el menor sea oído de manera obligatoria antes de que el órgano competente imponga la medida que considera más adecuada y efectiva, para así determinar cuál es su interés y valorarlo.

En virtud de la Observación 14 del Comité de Derechos del Niño (art. 2.1), por interés superior del menor se entiende que: *“es un derecho, un principio y una norma de procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta”*<sup>29</sup>. Entendiendo por lo expresado que hay que tener siempre presente por las instituciones y a la hora de tomar cualquier decisión qué puede concernir a este, las circunstancias concretas del menor para permitirle ejercer

---

<sup>26</sup> PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “El principio del interés del menor en derecho penal: Una visión crítica”, *cit.*, p. 163.

<sup>27</sup> PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “El principio del interés del menor en derecho penal: Una visión crítica”, *cit.*, p. 175.

<sup>28</sup> PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “El principio del interés del menor en derecho penal: Una visión crítica”, *cit.*, p. 182

<sup>29</sup> UNICEF, Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, <https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf>, p. 132, disponible a 26/04/2020.

todos los derechos que como menor se le reconocen en dicha Convención (art. 2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor).

Podemos aludir por tanto a dos aspectos básicos que son la evaluación y determinación de ese interés superior del menor<sup>30</sup>:

1. **La evaluación:** tanto al juez de menores como responsable en este caso de la toma de decisiones, como al Equipo Técnico (como apoyo del mismo) les corresponde tener en cuenta todos y cada uno de los elementos que rodean a ese menor para llegar a la solución correcta o más adecuada<sup>31</sup>.
2. **La determinación:** llevar un proceso proporcional y adecuado con todas las garantías para determinar el interés superior del menor<sup>32</sup>.

En ambos textos (en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y en el art. 2 de nuestra Ley Orgánica de la Protección Jurídica del Menor) el contenido al respecto de lo que se entiende por interés superior del menor coincide, pero podemos encontrar diferencias al respecto de lo que se entiende por “elementos” y “criterios generales” para determinar y evaluar dicho interés (véase anexo III).

### 2.1.2 El principio de oportunidad en el proceso penal de menores.

Antes de adentrarnos a reflexionar sobre este principio, tenemos que hacer una breve referencia a lo que hoy en día denominamos Justicia restaurativa y que, en base a ella, podemos considerar el principio de oportunidad como un mecanismo de no intervención basado en la flexibilidad en cuanto a las posibilidades procesales, para que prime la satisfacción del interés superior del menor<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *Marco del proyecto de I+D DER2013-47866-C3-2-P financiado por el Ministerio de Economía, Industria y competitividad: El interés superior del niño como derecho, principio y regla de procedimiento: la adaptación del derecho español y europeo*, 2017, p. 8, disponible a 02/03/2020 en <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/INTERÉS%20SUPERIOR%20DEL%20MENOR.pdf>

<sup>31</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 8.

<sup>32</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 8.

<sup>33</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *Revista para el análisis del derecho (InDret)*, 2012, p. 5.

En referencia a este principio y a todos los derechos que se reconocen a los menores, citamos la exposición de motivos de nuestra LORPM donde se le concede una especial importancia a la oportunidad que se le presta al menor de poder poner fin al conflicto de forma general con los métodos de Justicia restaurativa, y de manera concreta, con el procedimiento de mediación entre el menor infractor y la víctima.

Entendemos por este principio de oportunidad en sentido estricto: *“un mecanismo que otorga a su titular (titular de la acción penal) la posibilidad de desistir del inicio del proceso penal, así como de procurar el sobreseimiento o preclusión en el curso de la actividad investigativa y de disponer del contenido de la pretensión penal en cuanto a su supuesto y consecuencias, con fundamento en motivos definidos de manera inequívoca en la ley procesal”*<sup>34</sup>.

Los defensores del principio de oportunidad exponen una serie de ventajas con respecto a la aplicación del mismo a nivel social y de utilidad pública. Es decir, el principio de oportunidad da lugar a una temprana reparación de la víctima, evita los efectos estigmatizantes que conllevaría la sanción penal en el caso de los menores, contribuye a conseguir una justicia material y llevar a cabo un proceso sin que tengan lugar dilaciones injustificadas<sup>35</sup>.

El art. 40.3.b de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece la posibilidad de poder adoptar otro tipo de medidas que no sean someter al menor a un proceso judicial, siempre y cuando se considere que esa es la mejor solución en cuanto al caso concreto.

De lo contrario otros autores como REYNA ALFARO entienden que el principio de oportunidad quiebra el de legalidad dando lugar a una alta discrecionalidad en lo que respecta a dejar impune los actos cometidos por el menor<sup>36</sup>.

Por otro lado, el art. 25 LORPM (en relación con el art. 4 de esta misma ley) limita mucho el uso de este principio de oportunidad por causa de que la acusación particular como parte activa del proceso penal, puede seguir adelante con el mismo cuando así lo

---

<sup>34</sup> MOLINA LÓPEZ, R., “El principio de oportunidad en el proceso penal de menores”, *Nuevo Foro Penal*, núm. 72, 2009, pp. 67 y 68.

<sup>35</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, pp. 5 a 7.

<sup>36</sup> REYNA ALFARO, L.M., “Victimología y victimodogmática”, *Una aproximación al estudio de la víctima en el proceso penal*, 2003, pp. 191 a 242, citado por FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 6.



considere oportuno y así lo exprese ante el órgano judicialmente competente. Con este artículo dejamos de lado la dirección del Ministerio Fiscal y el interés del menor (el cual había sido considerado por este) para no continuar en su caso, con el procedimiento<sup>37</sup>.

Este art. 25 LORPM será desarrollado a lo largo del trabajo, para delimitar así su aplicación y los límites del mismo.

### **3. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO PENAL DE MENORES.**

Esta ley reguladora de la responsabilidad penal del menor lleva a cabo un régimen normativo para todas aquellas causas en las que los sujetos imputados de la comisión de un hecho delictivo son menores, los cuales, y como hemos dicho anteriormente, no pueden ser enjuiciados según lo previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto al procedimiento y en nuestro Código Penal respecto a las penas a imponer.

En este nuevo sistema que se instaura tras la promulgación de la LO 5/2000, la franja de edad a la que se dirige la misma se localiza entre los catorce años cumplidos (ya que a los infractores que tengan una edad inferior a 14 se considera la inimputabilidad absoluta), y los menores de dieciocho años.

Si analizamos la denominación misma de la ley, podemos entender que el legislador considera que al menor no se le puede someter al mismo sistema de enjuiciamiento al que estaría sometido un adulto en las mismas circunstancias, pero sí ve viable aplicarle una medida sancionando esa conducta, medida de carácter educativo y siempre atendiendo en cada caso particular al interés de ese menor, precisamente para evitar todas aquellas consecuencias que conlleva un proceso penal en sentido estricto como el que se lleva a cabo con los adultos<sup>38</sup>.

#### **a. PARTES EN EL PROCESO.**

En el proceso penal de menores podemos apreciar la actuación preponderante de dos partes principalmente: del Ministerio Fiscal y el menor. Sin perjuicio del importante papel que también representa y cada vez más, la víctima y aquellos ofendidos o perjudicados que como partes activas del proceso también forman parte del mismo

---

<sup>37</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 9.

<sup>38</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), *cit.*, p. 69.

(hacemos mención a la reforma realizada en la LO 15/2003, en la cual se modificó el art. 25 que posteriormente comentaremos en relación a la acusación particular)<sup>39</sup>.

Por un lado, el Ministerio Fiscal como defensor de los derechos que a los menores se les reconoce en virtud del art. 6 de la Ley 5/2000 y al mismo tiempo con la función de vigilancia de las actuaciones que se deban efectuar en su interés, (en el interés del menor) junto con la observancia de las garantías del procedimiento<sup>40</sup>.

En virtud del art. 16 LORPM el Ministerio Fiscal se encarga también de la incoación del expediente, además de recibir las denuncias, custodiar todo tipo de documentos y cualquier efecto que le hayan sido remitidos, la práctica de diligencias de investigación, junto con la posibilidad de poder archivar las mismas (las diligencias) en el caso de que el hecho denunciado no sea lo suficientemente grave o cuando no se consigue identificar al autor de la infracción, siempre notificando a las partes de estas actuaciones.

En cuanto al menor, y como ya mencionaremos en más ocasiones, no goza de capacidad plena, por lo que su actuación en ciertas fases del proceso como por ejemplo, a la hora de llevar a cabo su detención en virtud del art. 17.2 de esta ley, debe ir complementada con la asistencia de personas o instituciones que suplan dicha falta de capacidad (sus padres, tutor, entidades públicas encargadas del menor en cuestión, etc.), además de ser necesaria la asistencia letrada de su abogado, bien sea este de oficio o de confianza por parte del menor.

De igual manera al menor se le tiene que informar de todos los derechos y garantías procesales que le asisten durante la vida del procedimiento, no necesitando en este caso la asistencia de los anteriormente mencionados en virtud del art. 22.1 LORPM. Sería importante hacer mención del art. 12 de la Convención de la ONU sobre los derechos del niño donde también se le reconoce a este el derecho a ser oído directamente por el juez durante el proceso, pudiendo considerar por tanto a esta como una actuación “personalísima” del menor<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., pp. 69 y 70.

<sup>40</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 70.

<sup>41</sup> NOGUEIRA GANDÁSTEGUI, S. “Observaciones críticas al proceso penal de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad de Menores”. En *Anuario de Justicia de Menores, No III*. Ed. Astigi, España, 2003, pp. 144 y 145.

En cuanto al papel de la víctima en la exposición de motivos de la LORPM se reconoce como fundamental el rol que adquiere la misma en el proceso apuntando lo siguiente: *“Esta Ley arbitra un amplio derecho de participación a las víctimas, ofreciéndoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos”*.

En relación con el rol de la víctima, tenemos que puntualizar lo dispuesto en el art. 25 del texto original de la ley donde se reconocía al perjudicado una serie de facultades y derechos, pero de la misma manera se regulaba la inexistencia de la acción particular. Este fue reformado por la Disposición Final Segunda de la LO 15/2003 de 25 de noviembre que modificó la LO 5/2000.

Con esta nueva redacción, podrán personarse como acusadores particulares las personas directamente ofendidas por el delito, sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan de ser parte del procedimiento. Esto contrapone el espíritu inicial de la LO 5/2000, donde de manera expresa en la exposición de motivos se reconocía la participación del ofendido, pero de una manera limitada, añadiendo: *“No existe aquí la acción particular por los perjudicados por el hecho criminal, ni la acción popular de los ciudadanos, porque en estos casos el interés prioritario para la sociedad y el Estado coincide con el interés del menor”*<sup>42</sup>.

Por todo ello, entendemos que el legislador con esta reforma reafirma la participación del ofendido, elevando su nivel de participación en cuanto al proceso, otorgándole cualidad de parte y pasando a tener el poder de participar en el proceso en defensa de sus intereses, como por ejemplo en virtud del art. 25.b pudiendo incluso instar la imposición de las medidas al menor<sup>43</sup>.

Por todos estos motivos, podemos concluir en este aspecto que, si el fin de regular de manera separada y a través de una ley especial la responsabilidad penal del menor es, proteger al menor (el cual se encuentra en edad evolutiva) y alejarlo de lo regulado para los adultos, el hecho de otorgarle esas facultades a la parte ofendida como acusación

---

<sup>42</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p.73.

<sup>43</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 73.

particular, da lugar a un elemento distorsionador que puede dar lugar a disfunciones en el sistema<sup>44</sup>.

En referencia a este aspecto del proceso, debemos hacer referencia a que por parte de la Fiscalía General del Estado se determina que la acusación particular no podrá oponerse al sobreseimiento solicitado por la fiscalía para continuar de manera unilateral con el proceso en aquellos casos que nos encontremos en base a lo regulado en el art. 19 y el art. 27.4 LORPM, ya que esta acción estaría yendo en contra del principio de oportunidad al que se hace mención en la exposición de motivos de esta misma ley. Por ello, se propone la revisión de estos dos artículos para poder descartar de manera expresa la intervención del acusador particular cuando se den estas circunstancias, sin perjuicio del derecho de audiencia que se le reconoce en virtud del art. 25.f de la ley<sup>45</sup>.

Atribuyéndole por ende al fiscal en exclusiva la facultad de decidir sobre la adopción de las soluciones extrajudiciales del art. 19 LORPM y la opción de proponer o solicitar el sobreseimiento al Juez regulado en el art. 27.4, sin perjuicio de que la acusación pueda impugnar dicha decisión en aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos establecidos por la ley (*“que se trate de un delito menos grave sin violencia, ni intimidación grave”*)<sup>46</sup>.

## **b. FASES DEL PROCEDIMIENTO.**

Señala DE LA ROSA CORTINA que: *“Esta fase no debe ser abierta por el Fiscal en tanto no concurran los siguientes requisitos: 1) que los hechos denunciados resulten verosímiles, 2) que los hechos denunciados tengan relevancia penal; 3) que incriminen a una o varias personas menores de edad y mayores de 14 años; y 4) que el interés de los menores implicados no exija o aconseje hacer uso del principio de oportunidad archivando directamente las actuaciones”*<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> SANZ HERMIDA, Á., “La víctima en el proceso penal de menores”, *Anuario de Justicia de Menores*, núm. 1, Ed. Astigi, España, 2001, p. 200.

<sup>45</sup> Memoria de la Fiscalía General del Estado (Volumen 1), Madrid 2014, p. 755, disponible a 04/06/2020 en [file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/MEMORIA%20FGE%202014%20\(pág.%20753%20a%20756\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/MEMORIA%20FGE%202014%20(pág.%20753%20a%20756).pdf)

<sup>46</sup> Memoria del Fiscalía General del Estado (Volumen 1), cit., pp. 755 y 756.

<sup>47</sup> DE URBANO CASTRILLO, E. y DE LA ROSA CORTINA, J. M., *Comentarios a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor*, Aranzadi Editorial, Navarra, España, 2001, pp. 116 y 117.

En la primera etapa del procedimiento se procede a la instrucción del caso la cual corresponde al Ministerio Fiscal. El fiscal puede tanto actuar de oficio, como proceder a instancia de parte (cuando exista una denuncia previa).

Por lo dispuesto en el art. 16 LORPM, le corresponde al Ministerio Fiscal la posibilidad de incoar el expediente o no incoarlo, bien porque el hecho denunciado no es constitutivo de delito o al ser un delito menos grave sin violencia o intimidación el Ministerio Fiscal decida desistir y, por lo tanto, no continuar con el ejercicio de la acción penal, por lo que el Ministerio Fiscal cuenta con el monopolio de decidir sobre el desistimiento del expediente en virtud del artículo 18. Todo esto sin perjuicio de la posibilidad que tiene la parte activa del proceso de solicitar la responsabilidad civil derivada de los hechos.

Una vez admitida la denuncia a trámite, y decidida la incoación del expediente, le corresponde también al Ministerio Fiscal practicar las diligencias que considere pertinentes para la comprobación del hecho delictivo y de la responsabilidad del presunto infractor en el mismo (art. 16.3 y 23 LORPM). Sin embargo, el Ministerio Fiscal no podrá llevar a cabo diligencias que supongan una restricción de los derechos fundamentales, ya que en tal caso debe de solicitar al Juzgado de Menores la práctica de las mismas y este resolverá mediante auto motivado para el buen fin de la investigación (art. 23.3 LORPM).

En la instrucción también se pueden adoptar medidas cautelares en virtud del art. 28 de la ley cuando existan indicios racionales para adoptarlas, siendo necesario que el Ministerio Fiscal solicite al juez, la adopción de las mismas. También el art. 17 LORPM regula otra medida cautelar como es la detención de los menores.

En virtud del art. 28 LORPM las medidas cautelares a adoptar en un proceso penal de menores, teniendo en cuenta lo dispuesto al final del párrafo del apartado uno de este mismo artículo, que la medida cautelar podrá mantenerse hasta que recaiga sentencia firme, podrán consistir en: el internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez de manera expresa, o con convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.

Para poder adoptar dichas medidas cautelares, se desprende de la Circular 1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de

12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, de la Fiscalía General del Estado, al igual que del propio texto del artículo 28 LORPM que: *“es necesario que concurran en el menor indicios racionales de participación en el delito y que se compruebe además la existencia de riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia por parte del menor”*.

De otra parte, se debe de comprobar por parte del Ministerio Fiscal las circunstancias y características que rodean al menor y así analizar si conviene no iniciar el procedimiento atendiendo al interés del menor, y si así se dan los requisitos que dispone el art. 18 LORPM, es decir, cuando los hechos denunciados sean por delito menos grave sin violencia o intimidación, este procederá a informar a la entidad pública (en su caso como responsable del menor) y cabe la posibilidad de desistir de la incoación del expediente.

Cabe asimismo desistir de la continuación del expediente atendiendo al art. 19 LORPM. Debemos de acudir al Reglamento de la LO 5/2000, en concreto a su art. 5 (en relación con el art. 19 LORPM y la posibilidad de acudir a la vía de las soluciones extrajudiciales), donde se desarrolla el proceso exponiendo que es el Ministerio Fiscal (por iniciativa propia o por instancia del letrado del menor) el que si considera que existen las circunstancias requeridas para el desistimiento, solicitará al Equipo Técnico un informe sobre la conveniencia de adoptar la solución extrajudicial más adecuada al menor y a la víctima en ese caso concreto. Aunque también es posible que sea el propio Equipo Técnico el que proponga la medida en interés del menor (art. 27.3 de la LORPM y art. 5.2 del Reglamento).

Concretamente en el art. 19.3 LORPM se dispone que será el Equipo Técnico quien realice las funciones de mediación entre las partes (menor infractor y víctima) por lo que será necesario que este tenga conocimiento y acceso a toda la información necesaria sobre el asunto a tratar.

El Ministerio Fiscal requiere al Equipo Técnico que emita un informe respecto de la situación en la que se encuentra el menor en los diferentes aspectos: psíquico, físico, entre otros o la actualización del mismo si este ya existe y en el plazo de 10 días deberá ser remitido al juez de menores, facilitando una copia al letrado del menor (art. 27.1 LORPM). El informe elaborado por el Equipo Técnico deberá ceñirse a todas aquellas

circunstancias y comportamientos del menor que puedan haber influido o que le hayan podido llevar a la comisión del hecho delictivo.

La instrucción una vez dada por terminada y atendiendo a lo regulado en el art. 30 de la ley, el Ministerio Fiscal concluye el expediente, notifica del mismo a las partes y este es remitido al Juzgado de Menores.

Junto con el expediente se remite un escrito de alegaciones, donde se describen los hechos, el grado de participación del menor, la valoración jurídica de los mismos, con una especial mención a las circunstancias personales que rodean al menor y su entorno, además de una propuesta con las medidas a imponer que se consideran propias y adecuadas al caso reguladas en la ley; también puede no darse nada de esto y que se solicite el sobreseimiento de la causa<sup>48</sup>.

Por lo que respecta a la segunda etapa del procedimiento, se llevan a cabo los trámites para preparar y celebrar la audiencia, documentos que son remitidos al juez de menores ya que será este el que decida la apertura de la misma dando traslado a través del Secretario judicial, (ahora Letrado de la Administración de Justicia en virtud a la Disposición Adicional 1ª de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial) a las partes (tanto al Ministerio Fiscal, como a los ofendidos en el caso de que los hubiera y al defensor del menor) para que en el plazo de cinco días hábiles formulen sus escritos de alegación y las pruebas que quieren proponer ante el juez para su valoración. Posteriormente el juez se pronuncia en el plazo de cinco días sobre la procedencia de las pruebas y mediante auto fija el día y la hora de celebración de la audiencia, la cual es transmitida a las partes por el Letrado de la Administración de Justicia (art. 31 LORPM).

La audiencia se realizará con la presencia de las partes citada en el art. 35 de esta ley, en la cual el menor deberá reconocer o no los hechos expuestos en la misma, y dependiendo de si presta conformidad o no (art. 36 LORPM), el proceso concluirá ahí dictando el juez la resolución en esos mismos términos reconocidos por el menor o se pasará a la valoración de las pruebas propuestas y admitidas y ver los aspectos en los que existe esa controversia entre las partes.

---

<sup>48</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 79.

El juez pasará a oír a todas las partes (parte de la defensa, a la acusación y resto de actores presentes: Equipo Técnico o entidad pública en el caso de que deban de ser escuchados), siendo escuchado por último el menor (art. 37.2 LORPM). Una vez concluido con todas estas actuaciones, se declarará visto para sentencia en el plazo de cinco días tras dar por concluida la audiencia (art. 38 LORPM).

#### 4. JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL PROCESO DE MENORES.

Considero importante hacer mención en este trabajo del cambio de concepción que hemos experimentado respecto al origen de lo que consideramos hoy en día como Justicia restaurativa y junto con ella, a la mediación. El cambio se ha generado en cuanto a la finalidad correccional y punitiva frente al delincuente como alternativa a la hora de tratar la delincuencia juvenil<sup>49</sup>.

Este cambio aparece plasmado en la legislación, en nuestra LORPM. Precisamente la idea inicial y las reformas que han tenido lugar y que se han producido en el proceso penal de menores en nuestro país han buscado la finalidad de abandonar el modelo tradicional caracterizado por su carácter punitivo, para pasar a un modelo basado en la educación del menor y la resocialización del mismo.

La Justicia restaurativa tiene su razón de ser en la insatisfacción que de manera generalizada ocasionaba el modelo clásico penal, el cual dejaba de lado al perjudicado o víctima y daba lugar a una mayor conflictividad social<sup>50</sup>. Por ello y en base a lo argumentado hasta ahora, en el texto original de la LO 5/2000 se consigue dar esa importancia e intervención a la víctima en el proceso; considerando excesiva por otro lado, la intervención de la misma como acusación particular en base al art. 25 LORPM a partir de la reforma realizada en la LO 15/2003, de 25 de noviembre.

A modo de plasmar cómo está reconocida por nuestras instituciones y de proporcionar una definición de lo que se entiende por Justicia restaurativa, ECOSOC (Consejo Económico y Social) establece lo siguiente: *“es aquel procedimiento por el cual la víctima y el reo, u otro individuo o miembro de la comunidad lesionada por un delito,*

---

<sup>49</sup> SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M., “La mediación en el proceso español de menores a la luz de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores”, *laleydigital*360, 2018, p. 2.

<sup>50</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, pp. 9 y 10.



*participan activamente de manera conjunta en la resolución de las cuestiones relativas al ilícito penal, generalmente con la ayuda de un facilitador”*<sup>51</sup>.

La finalidad de esta alternativa al tratamiento de la delincuencia juvenil, se podría resumir en cuestiones muy claves: se busca que el menor infractor sea consciente del hecho cometido, que se lo atribuya como propio (en el caso que así sea) y sea capaz de ver que la víctima o perjudicado por el mismo es una víctima real a quien le tiene que reparar el daño causado de alguna manera (dándole así prioridad e importancia a la víctima), pero sobre todo se busca la reconciliación de las partes a través de estos métodos de Justicia restaurativa como son: la mediación, la conciliación y la reparación<sup>52</sup>.

Con estos procedimientos de Justicia restaurativa, el menor infractor (entre los 14 y 18 años) puede beneficiarse de un espacio que va a dar pie a la reflexión, a la comunicación activa y sana entre las partes, a incidir directamente sobre la capacidad de un posible cambio en la conducta del menor<sup>53</sup>.

Otros autores entienden la Justicia restaurativa como un diálogo, un encuentro personal y directo entre las partes de manera voluntaria, además de hacer referencia a la disponibilidad que este procedimiento tiene para las mismas<sup>54</sup>.

VARONA MARTÍNEZ entiende que este método extrajudicial otorga una mayor importancia a la figura de la víctima ya que se pretende la reparación social, personal y emocional, y previene la reincidencia, además de ser una alternativa más manejable para llegar a la resolución de un conflicto<sup>55</sup>.

En cuanto a las características propias de este modelo de Justicia restaurativa, tendríamos que hacer mención:

---

<sup>51</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P. y SANTOS ITOIZ, E., “La medida penal, ¿un modelo de justicia restaurativa en el sistema de justicia penal?”, *Nuevo foro penal*, núm. 75, julio-diciembre, Universidad EAFIT, 2010, p. 63.

<sup>52</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 12.

<sup>53</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 12.

<sup>54</sup> RÍOS MARTÍN, J.C. / MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. / SEGOVIA BERNABÉ, J.L. / GALLEGOS DÍAZ, M. / CABRERA, P. / JIMÉNEZ ARBELO, M., Justicia restaurativa y Mediación penal. Análisis de una experiencia (2005-2008), pp. 9, 10 y 14, disponible a 26/04/2020 en [file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/Investigación%20del%20CGPJ%202008%202b%20\(2\)%201.0.0%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/Investigación%20del%20CGPJ%202008%202b%20(2)%201.0.0%20(3).pdf)

<sup>55</sup> VARONA MARTÍNEZ, G., *La mediación reparadora como estrategia de control social. Una nueva perspectiva criminológica*, Ed. Comares, Granada, 1998, p. 77.

- Por un lado, evita los efectos negativos que conllevaría someter al menor a un proceso judicial y a las consecuencias del mismo, con todo lo que ello significa. Es decir, una vez que un menor es condenado por la comisión de un hecho delictivo, debido a sus circunstancias personales, familiares, educativas, a sus oportunidades y capacidad, hace mucho más difícil que ese menor pueda salir de ese patrón de actuación (a consecuencia de ese carácter estigmatizador una vez que es sometido a un proceso judicial).
- Por otro lado, y con respecto a la víctima, esta se va a sentir escuchada, atendida de una manera más directa y personal y la solución va a ser mucho más satisfactoria.

La mediación en el ámbito penal en nuestro ordenamiento jurídico aparece regulada de manera expresa en la Ley 5/2000 sobre la responsabilidad penal de los menores, donde se permite el uso y la utilización de esta en el proceso, diferenciando distintos momentos procesales; y, por otro lado, en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, pero que en este caso no se permite, es decir, se prohíbe expresamente el uso de la mediación para estos procedimientos, además del art. 84 de nuestro Código penal y en el Estatuto de la Víctima, de 27 de abril (Ley 4/2015)<sup>56</sup> (véase anexo IV sobre los orígenes y normativa de la Justicia restaurativa).

#### 4.1 Mediación, Conciliación y Reparación a la luz de la LORPM.

Dentro de la Justicia restaurativa a la cual ya hemos hecho referencia, enumeramos al igual que lo hace nuestra normativa (LORPM), estos tres métodos alternativos de resolución del conflicto. Según el Consejo de la Unión Europea en la Recomendación (99) hace especial mención a la mediación y la define como: “*el procedimiento que permite a la víctima y al reo el participar activamente, consintiendo libremente, por la solución de las dificultades derivadas del delito, con la ayuda de un tercero independiente (el mediador)*”<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M., “La mediación en el proceso español de menores a la luz de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores”, *cit.*, p. 2.

<sup>57</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, pp. 16 y 17.

A continuación, pasaremos a explicar a través de una breve definición, lo que entendemos según nuestro ordenamiento jurídico por conciliación y reparación, centrándonos principalmente en la mediación penal dentro del proceso penal de menores:

- ❖ La conciliación (al igual que la reparación) y así se expone en la exposición de motivos de la LORPM, supone que tanto el menor infractor como la víctima llegan a un acuerdo. Además, la conciliación busca como finalidad que la víctima encuentre una satisfacción psicológica (a diferencia de la reparación en la que se busca además de esta satisfacción, un compromiso por parte del menor) a través de la cual, el menor deberá de arrepentirse de los hechos cometidos y estar dispuesto a pedir perdón a la víctima, a lo que esta última deberá de aceptar sus disculpas.
- ❖ En cuanto a la reparación en virtud del art. 19 LORPM: “*se entenderá por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva*”. Siendo esta (la reparación) realmente útil en aquellos procesos en los que la víctima ya sea porque no quiere participar de manera activa, o porque hayan sido perjudicados una pluralidad de personas, pueda llegarse a reparar esa situación y con ello poner fin al conflicto<sup>58</sup>.

De igual manera, en la Justicia restaurativa si atendemos concretamente a la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito, se reconocen los derechos que asisten a las mismas, junto con la posibilidad de poder acceder u optar a una de las soluciones que forman parte de la Justicia restaurativa.

La Justicia restaurativa no debe entenderse y más concretamente la mediación, como una alternativa blanda de justicia, pero sí como otra manera de afrontar los conflictos, apoyándose en las capacidades y recursos personales de las personas que participen en el proceso, principalmente promoviendo el diálogo, la escucha y la necesidad de cada una de las partes enfrentadas<sup>59</sup>.

Estos métodos alternativos de resolución de conflictos, entre los que se encuentra la mediación, pueden ser considerados como una oportunidad, siempre y cuando se haga

---

<sup>58</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 17.

<sup>59</sup> GARMENDIA LOYARTE, E., “Mediación penal juvenil”, *Revista científica DOCRIM*, 2019, pp. 27 y 28.

de los mismos una gestión adecuada, pudiendo constituir dinámicas positivas de ayuda al desarrollo y crecimiento personal<sup>60</sup>. La mediación permite afrontar el conflicto de una manera más natural para todas las partes implicadas (menor infractor y víctima), aunque también es necesario señalar que cabe la posibilidad de que no siempre la mediación funcionará en todos los casos, ni ante cualquier situación.

#### 4.2 La mediación en la LO 5/2000 y el Reglamento. Principios.

La mediación en nuestra LORPM y en su Reglamento de desarrollo la tenemos que entender como la forma de materializar el principio de oportunidad e intervención mínima, sin perjuicio de que este procedimiento va a ser siempre seguido y va a estar ligado a un previo proceso judicial revisado por las autoridades judicialmente competentes.

Siendo la propia legislación la que, por un lado, delimita los temas objeto de un procedimiento de mediación penal y por otro, hace una distinción en función del momento procesal en el que nos encontremos: antes de haberse dictado la resolución judicial (pre-sentenciales) o una vez dictada de manera firme la medida a ejecutar (post-sentenciales)<sup>61</sup>.

En ambas situaciones la finalidad de la mediación conlleva una gran labor resocializadora y educativa, repara a la víctima de una manera mucho más satisfactoria para las partes y todo esto conlleva un aprendizaje.

Es necesario mencionar los principios que inspiran y son fundamentales en un procedimiento de mediación. Estos principios son el marco general en la práctica, debiendo estar presentes durante todo el procedimiento de mediación:

- a. **Voluntariedad:** no se puede obligar a las partes a ir a mediación y por ello, siempre que acudan cada una de las partes a la misma, deberá de ser de manera voluntaria. Se puede asesorar, orientar, promover, pero que esto no suponga o que las partes lo interpreten, como una obligatoriedad<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> DEL CAMPO SORRIBAS, J., VILÁ BAÑOS, R., BARBERAN MARTÍ, J. y VINUESA CASAS, M. R., “La mediación con jóvenes inmigrantes en el ámbito de la justicia penal juvenil: un enfoque educativo”, *Revista de Investigación Educativa*, 2006, p. 48.

<sup>61</sup> ÁLVAREZ RAMOS, F., “La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *Internacional E-Journal of Criminal Sciences*, 2008, pp. 8 y 15.

<sup>62</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 16.

- b. **Confidencialidad:** sobre todo aquello en lo que se trabaje entre las partes implicadas y que el Equipo Técnico lo considere de interés, al igual que el acuerdo al que se llegue entre el menor infractor y la víctima, se va a remitir por parte del Equipo Técnico al Ministerio Fiscal en su informe y este a su vez al juez en el caso que así corresponda, pero no es requisito necesario informar de absolutamente todo el procedimiento. Es decir, informar solamente a través del informe, del resultado y de que este cumple los requisitos exigidos por la ley, el resto será confidencial<sup>63</sup>.
- c. **Objetividad e imparcialidad del mediador:** el mediador debe ser totalmente imparcial y objetivo durante todo el procedimiento de mediación en cuanto a las posiciones e intereses de las partes<sup>64</sup>.
- d. **Comunicación y diálogo:** aquí debemos de hacer referencia a aquellas técnicas o herramientas de las que un mediador hace uso para conseguir y facilitar a las partes llegar al objetivo que se pretende con la mediación, como, por ejemplo: escucha activa, estructurar las intervenciones de cada una de las partes, el respeto, el tono de voz adecuada para dirigirse a las mismas, seleccionar un espacio idóneo para realizar ahí los encuentros<sup>65</sup>.
- e. **Privacidad:** las partes intervinientes van a ser las únicas que formarán parte del procedimiento de mediación y que tendrán conocimiento de este. En este procedimiento, el Equipo Técnico en su informe únicamente remitirá al Ministerio Fiscal el resultado del mismo junto el acuerdo entre las partes (en el caso de que exista acuerdo), el resto será confidencial<sup>66</sup>.
- f. **Libertad y seguridad:** partiendo de la base de que las partes para iniciar un procedimiento de mediación deben de aceptar de manera voluntaria llevarlo a cabo, estas (las partes) a la hora de acudir a la mediación deberán sentirse seguras y creer en la idea de que contar su opinión y experiencia de manera libre y segura, va a suponer como objetivo una serie de beneficios o ventajas<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 16.

<sup>64</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 16.

<sup>65</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 17.

<sup>66</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 17.

<sup>67</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 17.

## 5. FUNDAMENTO Y OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN PENAL JUVENIL.

En este apartado analizaremos de manera muy breve en qué medida favorece llevar a cabo un procedimiento de mediación, a los menores, a la víctima y a la Administración de Justicia:

- Desde el plano del menor infractor contribuye a que este asuma las consecuencias de sus actos y rectificar al respecto para un futuro, restaurar de una manera más directa el perjuicio ocasionado y empatizar con el perjudicado; educando en todo ello al menor para evitar la reincidencia<sup>68</sup>.
- Desde el plano de la víctima, además de repararla en el plano material, puede servir de ayuda para eliminar la frustración, la rabia y demás sentimientos negativos hacia el menor infractor, permitiendo que la víctima logre escuchar y llegar a empatizar con el infractor y ser compensada por los daños sufridos<sup>69</sup>.
- Desde el plano de la Administración de Justicia se cumplen los principios de oportunidad, intervención mínima e interés superior del menor. Además de fomentar el diálogo y la convivencia en la comunidad en general, también favorece en cuanto a aliviar a la justicia de la sobrecarga habitual, solucionando el conflicto de manera pacífica<sup>70</sup>.

Desde hace varias décadas se ha considerado que la mediación es un medio consensual que conoce de múltiples ventajas, y más concretamente se considera a la misma como un trayecto alternativo que nos proporciona hallar soluciones a través del encuentro entre las partes para las que existe una controversia<sup>71</sup>.

- Desde la perspectiva de la prevención, se favorece la resocialización y la capacidad de adaptación del infractor y como consecuencia de ello, su reinserción una vez se responsabiliza de sus actuaciones y contribuye a la reparación del daño<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> FERREIRÓS MARCO, C. E., SIRVENT BOTELLA, A., SIMONS VALLEJO, R., AMANTE GARCÍA, C., *La Mediación en el Derecho Penal de Menores (Edición N.1)*, Monografías Dykinson, Madrid, 2011, p. 219.

<sup>69</sup> FERREIRÓS MARCO, C. E., SIRVENT BOTELLA, A., SIMONS VALLEJO, R., AMANTE GARCÍA, C., “La Mediación en el Derecho Penal de Menores”, *cit.*, p. 219.

<sup>70</sup> FERREIRÓS MARCO, C. E., SIRVENT BOTELLA, A., SIMONS VALLEJO, R., AMANTE GARCÍA, C., “La Mediación en el Derecho Penal de Menores”, *cit.*, p. 220.

<sup>71</sup> PALOMINO ORTEGA, A., *La Mediación Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Máster), Universidad de Valladolid, Campus María Zambrano, Segovia, p. 10, disponible a 09/05/2020 en [file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFM%20Valladolid%20-%20Mediación%20\(II\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFM%20Valladolid%20-%20Mediación%20(II).pdf)

<sup>72</sup> PALOMINO ORTEGA, A., *La Mediación Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Máster), *cit.*, p. 10.

- Desde la perspectiva personal, es una alternativa pacífica y ventajosa para todos los que intervienen. Es decir, tanto la víctima sale reforzada desde un punto de vista psicológico y mental, además de que, en su caso, se produce la reparación material del daño, y por parte del menor infractor, este colabora y adquiere una serie de aptitudes que le permiten corregir su actuación, además de que se le brinda la oportunidad de evolucionar y desarrollarse tanto educativa y profesionalmente, como personal y socialmente<sup>73</sup>.

La comunidad en sentido amplio aquí también se ve beneficiada en cuanto a que, si dicho menor logra cambiar su conducta y reinsertarse en la sociedad, disminuye la peligrosidad y se cumplirían los objetivos perseguidos a la hora de realizar un procedimiento de mediación.

- Desde el punto de vista de la ejecución, se tiene constancia del alto porcentaje de cumplimiento voluntario de los acuerdos de mediación (superando el 90%)<sup>74</sup> y en cuanto al procedimiento, estaríamos recurriendo a una vía mucho más sencilla y ágil.

### 5.1 El perfil del mediador.

La función de los mediadores durante el procedimiento de mediación exige llevar a cabo una serie de cualidades y habilidades muy concretas como, por ejemplo:

- a. Deben de ser personas con una capacidad muy desarrollada de síntesis, ayudando por tanto a las partes a recopilar todos aquellos datos relevantes cuando así sea necesario<sup>75</sup>.
- b. Teniendo siempre en cuenta, por otro lado, que el mediador nunca debe actuar como un árbitro imponiendo de alguna manera una determinada decisión u opinión; simplemente tiene el deber de no posicionarse de alguna manera respecto a una de las partes del conflicto o a una versión de ellas<sup>76</sup>.

<sup>73</sup> PALOMINO ORTEGA, A., *La Mediación Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Máster), cit., p. 10.

<sup>74</sup> PALOMINO ORTEGA, A., *La Mediación Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Máster), cit., p. 12.

<sup>75</sup> SANCH A MATA, V., “Reparación extrajudicial del daño en el ámbito del derecho penal de menores”, núm 15, *Eguzkilore*, San Sebastián, 2001, p. 157.

<sup>76</sup> SANCH A MATA, V., “Reparación extrajudicial del daño en el ámbito del derecho penal de menores”, cit., p. 157.

- c. Partimos de la base de que el mediador va a conocer todo lo que rodea a ese menor, es decir, va a ser conocedor de su entorno social, económico, educativo, familiar, por lo que no podemos considerarlo como un ajeno al conflicto en este sentido. Como consecuencia de ello ayudará a las partes a que opten por la solución o medida más adecuada para ese menor<sup>77</sup>.

#### 5.1.1 El Equipo Técnico.

Este Equipo Técnico y en relación con el perfil del mediador, está compuesto por una serie de profesionales pertenecientes al ámbito de la psicología, de la educación, junto con la rama de trabajo social, los cuales se deben de regir por una serie de principios que deben ponerse en la práctica durante toda la vida del proceso: “flexibilidad, legalidad, voluntariedad, confidencialidad, objetividad, comunicación, diálogo, privacidad, seguridad”<sup>78</sup>.

En cuanto a sus funciones, estos deben: asistir al menor en sus necesidades psicosociales, informar al menor de las reparaciones a realizar derivadas de la comisión de la conducta delictiva, promover la reeducación del menor infractor, además de realizar informes preceptivos donde se manifieste la situación del menor desde el ámbito psicológico, educativo y familiar. Deben proponer un informe sobre la decisión de si conviene o no continuar con la tramitación del expediente atendiendo al interés del menor<sup>79</sup>.

Todas las funciones concernientes a la actuación del Equipo Técnico aparecen reguladas en el art. 27 de la LORPM.

#### 5.1.2 La figura del Equipo Técnico en la mediación.

La figura imparcial del tercero mediador es una figura clave del proceso; es necesario que se respeten los principios básicos de la mediación entre los que se encuentran la imparcialidad, la objetividad y la confidencialidad, entre otros.

---

<sup>77</sup> SANCHÁ MATA, V., “Reparación extrajudicial del daño en el ámbito del derecho penal de menores”, *cit.*, p. 158.

<sup>78</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 17.

<sup>79</sup> AGUILERA ROJAS, M., *Mediación y Conciliación en la Justicia Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Grado), Universidad de Jaén, 2017, pp. 40 y 41, disponible a 12/05/2020 en <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFG%20Universidad%20de%20Jaén%20-%20Mediación.pdf>



En base a esto, nos encontramos que según el art. 27 LORPM el Equipo Técnico depende funcionalmente del Ministerio Fiscal y como consecuencia de ello algún sector de la doctrina procesalista determina que algunos de los principios mencionados anteriormente quedan especialmente afectados y cuestionados<sup>80</sup>. Es decir, si en el proceso de mediación el menor relata o afirma una serie de hechos, se plantean la cuestión de si estos hechos luego pueden influir de manera negativa en la posterior toma de decisiones del Equipo Técnico, y si esto es así, dicho proceso de mediación no cumpliría ninguno de los objetivos a los que hemos hecho mención a lo largo de este trabajo.

Por ello, en la Recomendación (99) 19 de 15 septiembre de 1999 del Comité de Ministros del Consejo de EU sobre mediación en materia penal se ofrecen unas pautas a tener en cuenta para llegar a la conclusión de que el resultado de la mediación no puede ser usado como indicio o testimonio de culpa<sup>81</sup>.

Por hacer una labor de comparación entre otros Estados europeos, volvemos a Italia y Alemania, donde la realización de las labores de mediación, son llevadas a cabo por instituciones públicas, pero desvinculadas en todo caso de las personas u otros entes participantes directamente de funciones relacionadas con el Juzgado de Menores<sup>82</sup>.

Aquí planteamos la necesidad de valorar o pensar si la institución del Equipo Técnico está en condiciones de poder ejercitar las labores de mediación<sup>83</sup>. Una de las alternativas que se plantean con respecto a esta cuestión es que se lleven a cabo los procedimientos de mediación por equipos de mediación independientes al juzgado o que lo lleven a cabo miembros que formen parte del Equipo Técnico del juzgado, pero que de manera posterior no formen parte del personal del Equipo que elabore el informe y que por consiguiente propondrá la medida<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> PERIS RIERA, J. “El modelo de mediación y reparación en el nuevo marco de la responsabilidad penal de los menores previsto por la LO 5/2000”, *La Ley*, 2001, pp. 1649 a 1653. Citado por FRANCÉS LECUMBERRI, P. “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 30

<sup>81</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 30.

<sup>82</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 31.

<sup>83</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 32.

<sup>84</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 32.

### 5.1.3 Actuaciones del Equipo Técnico en cuanto al procedimiento de mediación.

Podemos atender a dos momentos dados los cuales se puede dar lugar a la mediación y a partir de ahí ir desarrollando las distintas funciones y actuaciones que corresponden al Equipo Técnico:

En un primer lugar en cuanto a las soluciones extrajudiciales pre-sentenciales en virtud del Reglamento, hay una doble forma de iniciar el procedimiento de mediación, tanto por iniciativa del Ministerio Fiscal que solicita al Equipo Técnico que considere la conveniencia de adoptar una solución extrajudicial, atendiendo sobre todo en el interés del menor y de la víctima (en virtud de lo establecido en el art. 5.1.a del Reglamento que desarrolla LORPM)<sup>85</sup>. Para llegar a esa valoración tenemos que encontrarnos ante la realización de un hecho, el cual tiene que ser reconocido por el menor y que ese hecho sea constitutivo de un delito menos grave de los tipificados en el Código Penal.

Por otro lado, el procedimiento puede llevarse a cabo por la iniciativa directamente del Equipo Técnico durante el desarrollo del proceso en virtud de lo regulado en el art. 27.3 LORPM y art. 5.2 del Reglamento.

A continuación, el Equipo Técnico recibiría el caso para estudiar la idoneidad de las circunstancias y del hecho en concreto y realiza un análisis de toda la documentación aportada en el proceso, siendo el menor a continuación citado por este mismo, junto a sus representantes legales y a su letrado para proporcionar y asegurar todas las garantías procesales<sup>86</sup>. Es decir, una vez realizada la apertura del expediente, el Equipo Técnico cita al menor, el cual debe ir acompañado de sus representantes legales y su defensa (letrado), y a todos ellos se les menciona la posible opción de derivar el proceso a un procedimiento de mediación (previo estudio de la idoneidad de las circunstancias y del hecho concreto por parte del Equipo Técnico)<sup>87</sup>.

Se informará al menor de lo que significa y conlleva seguir adelante con un procedimiento de mediación y puede darse el consentimiento afirmando la aceptación de esa posibilidad por parte del menor y sus representantes legales, o de lo contrario, en el

---

<sup>85</sup> ÁLVAREZ RAMOS, F., “La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *cit.*, p. 8.

<sup>86</sup> AGUILERA ROJAS, M., *Mediación y Conciliación en la Justicia Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Grado), *cit.*, p. 33.

<sup>87</sup> COLÁS TURÉGAN, A., “Hacia una humanización de la Justicia Penal: La Mediación en la Justicia Juvenil española. Principios y ámbito aplicativo en la LO 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad penal de los menores”, *Revista Boliviana de Derecho*, 2015, p. 162.

caso de que no acepte, se avisará de dichos hechos al Ministerio Fiscal y se continuará con el proceso penal previsto tal y como lo conocemos en nuestro ordenamiento<sup>88</sup>.

Una vez se ha contactado con el menor infractor, la siguiente actuación es contactar con la víctima o perjudicado para que preste su aceptación de igual manera para ser parte en el procedimiento de mediación, evaluando a su vez la capacidad y el grado de voluntad que tiene la víctima de participar en el mismo. En el caso de la que víctima sea también menor de edad, esta deberá ir acompañada de sus representantes legales y se necesitará el consentimiento de estos últimos, más la conformidad en este caso del juez de menores.

Es necesario la ausencia de deseos vindicativos y la participación activa de la víctima para solucionar el conflicto frente al menor infractor, y al que esta misma reconoce como tal<sup>89</sup>.

Para iniciar con certeza las actuaciones referentes a este procedimiento de mediación, el Equipo Técnico debe de pararse a comprobar y analizar la viabilidad de la mediación en cada caso concreto a través de una visión en su conjunto de todo lo que supone el conflicto en cuestión.

Caben distintas actuaciones una vez iniciamos la ejecución del programa de mediación, todo ello eso sí, con la finalidad educativa, resocializadora y reparativa que conocemos<sup>90</sup>:

- Por un lado, puede darse un encuentro entre el menor infractor y la víctima o perjudicado, donde puede optarse por una aproximación de las partes, una rectificación por parte del menor infractor respecto su actuación, así como el compromiso o el deber por parte de dicho menor (siempre como iniciativa del mismo) de asumir las consecuencias de sus hechos, llegando a un acuerdo entre ambas partes que debe ser firmado por los mismos<sup>91</sup>.

---

<sup>88</sup> ÁLVAREZ RAMOS, F., “La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *cit.*, p. 10.

<sup>89</sup> ÁLVAREZ RAMOS, F., “La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *cit.*, p. 13.

<sup>90</sup> GARCÍA PÉREZ, O., “La mediación en el sistema español de Justicia penal de menores”, *Criminalidad*, 2011, p. 85, disponible a 05/06/2020, en <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/3870697.pdf>.

<sup>91</sup> AGUILERA ROJAS, M., *Mediación y Conciliación en la Justicia Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Grado), *cit.*, p. 34.

- Por otro lado, la víctima o perjudicado quiere intervenir, pero no considera oportuno un encuentro físico y directo con el menor infractor, por lo que se llevará a cabo el procedimiento de mediación de igual manera, excepto por que la comunicación no será tan directa o personal entre ese menor y la víctima<sup>92</sup>.

El art. 19 LORPM prevé tres posibles opciones respecto del contenido del acuerdo: por un lado, la conciliación (art. 19.2) donde el menor debe de asumir los hechos, su actuación y responsabilidad pidiendo perdón a la víctima, la cual tiene que aceptar las disculpas para que surta efecto. Por otro lado, la reparación del daño (sobre todo haciéndose cargo el menor de restaurar ese daño desde una perspectiva material) o a través de una actividad educativa. Y por último será el Equipo técnico el que manifieste posibles actuaciones con las cuales el menor puede adquirir o desarrollar aptitudes académicas o profesionales<sup>93</sup>.

El Equipo Técnico deberá de notificar al Ministerio Fiscal sobre el acuerdo alcanzado o no, los motivos del mismo y su grado de cumplimiento, teniendo que aportar criterios válidos y suficientes para archivar las actuaciones o, por el contrario, seguir adelante con el expediente sancionador (art. 19.4 y 5 LORPM). Es decir, una vez concluidas las actuaciones del Equipo Técnico, el Ministerio Fiscal da por concluida la instrucción, solicitando al Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, o de lo contrario atendiendo al apartado 5º de este mismo artículo 19 LORPM, el Ministerio Fiscal proseguirá con la tramitación del expediente.

Además, la Ley Orgánica 5/2000 habilita otra posible vía a raíz del art. 33, en el cual permite al juez de menores la posibilidad de decidir sobreseer las actuaciones a través de un auto motivado, por petición del Ministerio Fiscal y de los escritos de alegaciones de las partes.

En segundo lugar, si atendemos a las soluciones extrajudiciales en fase de ejecución también reguladas en el Reglamento, nos encontramos ante un proceso que ya ha finalizado y como consecuencia de ello, existe sentencia condenatoria<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> AGUILERA ROJAS, M., *Mediación y Conciliación en la Justicia Penal Juvenil* (Trabajo Fin de Grado), cit., p. 34.

<sup>93</sup> GARCÍA PÉREZ, O., “La mediación en el sistema español de Justicia penal de menores”, cit., p. 78.

<sup>94</sup> ÁLVAREZ RAMOS, F., “La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, cit., p. 15

El objetivo que en este caso tiene el procedimiento extrajudicial (la conciliación), es la posibilidad de ver finalizado el cumplimiento de esa medida y por ello, ante este tipo de situaciones se llevaría a cabo una conciliación entre menor y víctima<sup>95</sup>. En estas circunstancias el menor lleva un tiempo ejecutando la medida adoptada por el juez de menores y puede dar lugar a ser un motivo de peso para poner fin a la misma.

Debemos hacer una especial mención al apartado tercero de artículo 51 LORPM ya que la conciliación entre menor y víctima en cualquier momento, puede dejar sin efecto la medida impuesta cuando el juez (a propuesta del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y oído el Equipo Técnico o la entidad pública de protección o reforma de menores en su caso) juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplida, expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor.

Finalmente, el concepto de la mediación es diferente en la post-sentencial, ya que la conciliación o la reparación requiere la participación de la víctima, mientras que en la pre-sentencial se puede optar por la conciliación o reparación, o por tareas en beneficio de la sociedad, por lo que en las dos primeras se precisa de la participación de la víctima, pero en las prestaciones al servicio de la comunidad a modo de reparación social, no es necesaria la presencia de la misma<sup>96</sup>.

## **5.2 Etapas del procedimiento.**

Una primera etapa sería un estudio de la documentación, es decir el Ministerio Fiscal debe de facilitar y transmitir al Equipo Técnico una copia de toda la documentación necesaria que aparece en el expediente, donde también se le remite ya la calificación llevada a cabo por el fiscal respecto de la comisión del hecho delictivo: si ha sido calificado como delito menos grave, siempre y cuando no haya violencia o intimidación.

Una segunda fase sería la entrevista con el menor, representantes legales y junto con ellos llevar a cabo la tarea de reunir datos. Lo más importante en esta fase del procedimiento es que en este momento, como ya hemos señalado anteriormente, se realiza la valoración de si es posible poner en marcha la mediación.

---

<sup>95</sup> ÁLVAREZ RAMOS, F., “La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *cit.*, p. 15.

<sup>96</sup> ÁLVAREZ RAMOS, F., “La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *cit.*, p. 17.

Aquí se conocerá como se desarrolló la comisión del hecho delictivo desde la perspectiva del menor infractor y podrá analizarse (como aproximamiento) si el menor es conocedor de lo que conllevan los hechos que ha llevado a cabo y si muestra algún tipo de arrepentimiento o responsabilidad ante los mismos<sup>97</sup>.

A continuación, se delibera una decisión con carácter interdisciplinar. Una vez han actuado todos los miembros que conforman el Equipo Técnico y han tenido una primera toma de contacto, deliberan para decidir si conviene o no en el caso concreto llevar a cabo una mediación y si es así deben remitirle dicha decisión al Ministerio Fiscal y una vez es autorizado por este, se pasa a exponer la decisión a las demás partes intervinientes en el proceso<sup>98</sup>.

Una vez se ha comunicado a las partes la apertura del procedimiento de mediación, el Equipo Técnico pasa a entrevistarse con ambas partes: menor infractor y víctima, donde puede darse que se produzcan encuentros conjuntos o la víctima decida no tener un encuentro directo con el menor infractor y las entrevistas se llevarán a cabo entonces por separado.

En estas entrevistas tendrá lugar un desarrollo y explicación de los hechos por parte de los implicados, se desarrollarán una serie de técnicas o herramientas propias de la mediación por parte del Equipo Técnico como la escucha activa, el parafraseo, todo aquello que considere pertinente para llevar y encauzar dichos encuentros, siempre con la finalidad de alcanzar un posible acuerdo entre las partes.

Por último, el Equipo Técnico elabora un informe el cual deberá remitir al Ministerio Fiscal sobre el desarrollo y fin de la mediación, solicitando además en el caso de que se hubiera llegado a un acuerdo y compromiso por parte del menor infractor para el cumplimiento del mismo, la solicitud de archivo de las actuaciones<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> RUIZ CERMEÑO, I., *La Mediación en el ámbito de la Justicia Penal de Menores* (Trabajo de Fin de Máster), Universidad de Valladolid, Campus María Zambrano, Segovia, 2018, p. 26, disponible a 15/05/2020 en <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFM%20Valladolid%20-%20Mediación.pdf>

<sup>98</sup> RUIZ CERMEÑO, I., *La Mediación en el ámbito de la Justicia Penal de Menores* (Trabajo de Fin de Máster), cit., p. 28.

<sup>99</sup> RUIZ CERMEÑO, I., *La Mediación en el ámbito de la Justicia Penal de Menores* (Trabajo de Fin de Máster), cit., p. 30.

### 5.2.1 Etapas del procedimiento en relación con el principio de oportunidad.

Por otro lado, y sin salirnos de lo que respecta a las fases del procedimiento, podemos hacer otro análisis en relación con el principio de oportunidad regulado en nuestra LORPM<sup>100</sup>:

#### a. Fase de instrucción (art. 18, 19 y 27.4 LORPM)

- Contamos con el artículo 18 LORPM en cuanto a la posibilidad de desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar siempre y cuando los hechos denunciados sean calificados como delito menos grave sin violencia e intimidación.
- El artículo 27.4 de la ley en relación con la conveniencia de continuar con el expediente, pero en este caso será el Equipo Técnico el que propondrá si continuar o no con el expediente atendiendo al interés superior del menor y a las circunstancias del caso concreto.
- El artículo 19 LORPM de igual manera prevé otra posibilidad de sobreseer el expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima. Recogiendo todo lo anterior contamos con la Circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado que expone lo siguiente: *“El escrito de alegaciones formulado por el Fiscal y su remisión al Juzgado de Menores, pone término a la fase de instrucción -que, como se ha dicho supra, requiere un acto formal de conclusión del Expediente- y posibilita la apertura de lo que el texto legal llama fase de audiencia (arts. 30 y 31). Esta fase, tal y como ha sido concebida por el legislador es de naturaleza eventual. No existirá en aquellos casos en que la terminación del procedimiento se verifique mediante archivo acordado por el Fiscal cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido (art. 16.2). Tampoco cuando el Fiscal desista de la incoación del Expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar (art. 18). Fuera de estos casos en los que la LO 5/2000 no ha impuesto fórmulas de control jurisdiccional a la decisión de archivo, los restantes supuestos de terminación anticipada del procedimiento a instancia del Fiscal exigirán la formal conclusión del Expediente. Así acontece, por ejemplo, con la fórmula acogida por el art. 19, precepto regulador del sobreseimiento por*

---

<sup>100</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 18.

*conciliación o reparación entre el menor y la víctima o la que regula el art. 27.4, relativa a aquellos casos en que el Equipo Técnico sugiere en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del Expediente”.*

Una vez producida la conciliación o cumplidos los compromisos de reparación o cuando unos u otros no hayan podido llevarse a cabo por motivos ajenos a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará al juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. De lo contrario, el Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente (art. 19.4 LORPM).

- a. **Fase intermedia (art. 32 LORPM):** en dicho artículo se regula la posibilidad de una sentencia de conformidad en lo referente a la responsabilidad civil y penal como consecuencia del hecho cometido y los daños derivados del mismo. En el caso de que el menor y su letrado no atiendan a esta conformidad se celebrará la audiencia para discutir lo relativo a las consecuencias de la comisión de ese ilícito.
- b. **Fase de audiencia (art. 36 LORPM)**
  - En el artículo 36 de la ley se establecen los posibles supuestos de conformidad del menor y su procedimiento; el Letrado de la Administración de Justicia informará al menor de las medidas y responsabilidad civil solicitadas, a las cuales este o su letrado podrán mostrar su conformidad o no.
  - Si muestran conformidad, se procederá a dictar sentencia basada en la misma, de lo contrario, el juez valorará si seguir o no con el procedimiento. Aunque también puede suceder que el menor y su letrado muestren conformidad respecto de los hechos, pero no de las medidas impuestas como consecuencia de los mismos, por lo que se continuará la audiencia tratando únicamente este asunto.
  - La LORPM prevé supuestos de suspensión y sustitución de las medidas, hecho que solo podrá llevarse a cabo después de la audiencia a todas las partes, en medidas no superiores a dos años de duración, lo cual se establecerá en la propia sentencia o en un auto motivado del juez competente<sup>101</sup>.

---

<sup>101</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 21.



Aparece regulada la sustitución de las medidas en el art. 51 LORPM y consiste en dejar sin efecto aquellas medidas adoptadas o sustituirlas por otras que se estimen más adecuadas de entre las previstas por la ley. Las condiciones para la aplicación práctica de este artículo son las siguientes: por un lado, que no se cometa ningún otro delito en el tiempo que dure la suspensión y, por otro lado, que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposición de reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones<sup>102</sup>.

Una de las características fundamentales del acuerdo es la amplia variedad de posibilidades que pueden darse como consecuencia de su flexibilidad. La solución nace del diálogo y de la “negociación entre las partes” por lo tanto hace que el acuerdo sea mucho más proporcional, adecuado y acorde para el menor y su posterior desarrollo y evolución, al igual que beneficioso para la víctima<sup>103</sup>.

Si se llega a un acuerdo, el contenido del mismo debe hacer alusión a la verdad material del hecho en cuestión, es decir, de los hechos tratados y que se pongan a la luz durante el procedimiento y no a la verdad judicial en cuanto a que nunca se podrá especular sobre el contenido del precepto penal a aplicar en el caso concreto. No se podrá entrar en debate sobre cuestiones relativas a la calificación jurídica determinada previamente por el Ministerio Fiscal en base a los hechos correspondientes al caso concreto, sino que se va a intentar mediar (una vez reconocidos esos hechos por el menor infractor) el conflicto surgido como consecuencia de la comisión de dichos hechos<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 21.

<sup>103</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 32.

<sup>104</sup> FRANCÉS LECUMBERRI, P., “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa”, *cit.*, p. 34.

## CONCLUSIONES

- La LO 5/2000, además de proporcionar una visión novedosa de lo que a partir de entonces se produciría con respecto al funcionamiento del sistema penal de menores, fue un gran avance a partir del cual los menores de catorce hasta los dieciocho años iban a ser juzgados y en su caso sancionados, a través de otras normas distintas a las que regulan las penas y el procedimiento penal en el ámbito de los adultos (CP y LECrim).
- Este cambio radical era totalmente necesario, a la par que muchos de los países de nuestro entorno también se sumaban a este cambio de mentalidad, aspecto que seguramente a nosotros también nos influyó a la hora de tomar la determinación de crear una ley específica para regular la responsabilidad penal de los menores. Ya no solamente haciendo referencia a introducir en la misma el concepto de Justicia restaurativa a través de métodos alternativos de resolución de conflictos en materia penal, sino por el simple hecho de regular un procedimiento pensado y orientado a mediar y proteger ese interés superior del menor.
- Este principio (el interés superior del menor) cuenta con una importancia digna de considerar a lo largo de toda la normativa de menores, aun conviviendo con otro tipo de principios, también importantes y que hemos ido mencionando a lo largo del trabajo (principio de oportunidad, de intervención mínima), el interés superior del menor debe de primar de tal manera que durante todo el procedimiento que se lleve a cabo y siempre antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar al menor, debe de atenderse y valorar ese interés, y una vez hecho esto se podrá determinar una decisión o solución concreta. Es decir, todo el procedimiento está sometido a velar por el mismo y no puede llevarse a cabo ninguna actuación en relación con el menor que vaya a ser contraria a ese interés, siempre aclarando y no confundiendo que el menor va a responsabilizarse de sus actos, y que no por atender a su interés no vaya a recibir una consecuencia ajustada y medida a su conducta; de ahí las medidas reguladas en el art. 7 LORPM.
- En cuanto al criterio biológico o cronológico por el que nuestro sistema de justicia penal se basa para determinar la imputabilidad o inimputabilidad, cierra por lo tanto de manera expresa que aquellos menores que se encuentren dentro de esta franja

cronológica (de los catorce a los dieciocho años) van a responder penalmente como consecuencia de la realización de un hecho delictivo.

Por otro lado, también hemos hecho mención al criterio de discernimiento, el cual se basa en la capacidad de demostrar que el menor infractor entiende y quiere los hechos que ha llevado a cabo y, por lo tanto, su consecuencia.

Pues bien, dando mi opinión en este aspecto, ya que puede dar pie a un mayor debate (al contrario que las anteriores conclusiones desde mi punto de vista), la combinación de ambos criterios daría lugar a un criterio mucho más objetivo. Es decir, aquellos delitos (sobre todo en el caso de los delitos calificados como menos graves) cometidos por menores que se encuentren en la franja de entre los catorce y dieciséis años, también habría que comprobar esa capacidad de entender y querer que supone el criterio del discernimiento, ya que si atendemos a la capacidad, desarrollo (tanto personal como psicológico) y evolución de ese menor de catorce años por ejemplo, el sistema de justicia puede llegar a la conclusión de que es inimputable por estos motivos (porque ni entiende, ni quiere) y no que por el simple hecho de entrar dentro del ámbito subjetivo de nuestra ley, sea penalizado por la realización de los mismos.

Todo ello, aunque a lo largo del procedimiento se atienda a su interés y se valore el mismo para proporcionar la medida apta y adecuada al caso concreto, podemos evitar que ese menor tenga que pasar por lo que conlleva realizar un procedimiento judicial y todo lo que ello significa.

Es decir, el criterio biológico o cronológico me parece mucho más objetivo e igualitario a la hora de aplicarlo a la práctica y de poder establecer unos criterios y límites en cuanto a la responsabilidad penal de los menores, pero en determinados casos como pueden ser actos realizados por menores de catorce, quince y dieciséis años (que además son los que menos hechos delictivos cometen según los informes del INE) puedan ser también valorados a través del criterio del discernimiento, ya que estamos hablando de edades muy tempranas a las que habría que atender exhaustivamente caso por caso para poder fijar una solución.

- Por otro lado, otro punto a destacar es el protagonismo en estos procedimientos del Ministerio Fiscal, siendo este el encargado de toda la fase de instrucción. La razón de

ser de dicho monopolio, correspondiendo al órgano jurisdiccional el enjuiciamiento del caso concreto en sentido estricto, es la defensa y garantía de los derechos de los menores, a la par de velar por la legalidad durante todo el procedimiento; aquí vemos representados en la práctica los principios de oportunidad, flexibilidad y como siempre, del interés superior del menor.

- La figura del Equipo Técnico también es una de las figuras novedosas del sistema penal juvenil, ya que es propia del proceso penal de menores, y al igual que el Ministerio Fiscal trata de velar por el menor. Todo ello para determinar cuál de las medidas establecidas en nuestra legislación es la oportuna (haciéndoselo así saber al Ministerio Fiscal y este a su vez al juez de menores) o si se da el caso, proponer la no continuación del procedimiento, derivando el mismo a otro tipo de soluciones reguladas y reconocidas en nuestra normativa.

Cabe concluir por ello que esta figura es más que positiva para la figura del menor en el proceso, permitiendo al mismo a través de la mediación resolver el conflicto, además de someter al menor a un procedimiento de aprendizaje, proporcionándole todos los medios, herramientas y ayuda que requiera y conseguir así que ese menor sea consciente y responsable de sus actos; evitando que a este se le imponga una medida, que aunque también tengan finalidad educativa, expone al menor a una posible estigmatización como delincuente y un futuro más problemático.

- Haciendo un repaso cronológico de las múltiples reformas que se llevan a cabo del texto original y de las finalidades y objetivos de la LORPM puede observarse un endurecimiento de las medidas, sin detenerse por parte del legislador a pensar cuáles son realmente los problemas y las consecuencias, es decir, no se atiende a otras soluciones que ofrece la ley para la resolución de conflictos (refiriéndonos en todo momento a las sucesivas reformas) y se centran en factores emocionales para dar respuesta a lo que se demanda por parte de la sociedad, sin respaldarse en datos objetivos y atendiendo únicamente a acontecimientos puntuales (véase gráfico anexo X).

De ahí que en la introducción de este trabajo haga mención a la sensación de impunidad delictiva que la sociedad ha ido asociando a ese texto original de la LO 5/2000, la cual se ha ido endureciendo a base de reformas y dejando de lado de manera

parcial alguno de los objetivos que desde un inicio se querían llevar a cabo; van incluyéndose medidas destinadas a luchar contra dicha impunidad y se endurecen o se prolonga la duración de las ya existentes.

- La Justicia restaurativa permite poder solucionar los conflictos existentes entre las partes, para que estos en cierta manera sean repuestos, compensados, o solucionados como objetivo final, llevando a cabo un procedimiento en el que son las propias partes las que van a llegar a la solución. Ello, aparte de que descongestiona el sistema de justicia que es la ventaja generalizada y conocida por la mayoría, permite que el menor comprenda, asuma, se responsabilice de sus hechos, dé todas las explicaciones oportunas y necesarias que solicite la otra parte y permite que esa otra parte como víctima o perjudicado, pueda llegar a comprender y perdonar a ese menor por los hechos cometidos o en caso contrario, al menos conseguir una tranquilidad mental y psicológica respecto a los hechos que ha padecido y encontrar de alguna manera una solución tanto material como moral a ese problema.

Considero que la mediación es el punto clave de toda la regulación de menores, fijando la visión un poco más allá del hecho de que la mediación pueda derivar en el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, es decir, no llegamos a apreciar y valorar el gran avance que se ha producido en nuestro sistema, permitiendo al menor tener lo que podríamos determinar como una “segunda oportunidad”, permitiendo así que este pueda corregir su actuación, enfocado sobre todo en la no reincidencia del mismo, a poder llegar a tener una vida digna a la cual tiene derecho; todo ello después de un procedimiento de trabajo, aprendizaje, de formación y educación de ese menor; no dejan de ser niños, menores de edad y con toda una vida por delante que no se tiene por qué ver truncada por un acontecimiento (siempre moviéndonos en el ámbito de los delitos menos graves, sin violencia ni intimidación como ámbito de aplicación de la mediación) que en la mayoría de los casos, no son conscientes de la trascendencia del mismo.

## ANEXOS

### ANEXO I – Análisis del límite de la edad penal en nuestro ordenamiento y en el Derecho comparado.

Todos los países comunitarios (al igual que España) coinciden en que el menor debe de recibir un tratamiento penal distinto al de los adultos y de ahí que contemos entre los distintos países, con características similares en lo que respecta al proceso penal de menores.

Entre una de esas características, todos los países europeos han ido modificando sus legislaciones para dar cumplimiento a lo que se determina en las distintas recomendaciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa inspiradas todas ellas en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, pero del mismo modo y de manera mayoritaria se apuesta por la reinserción y socialización del menor de nuevo en la sociedad y como consecuencia de ello, por adoptar medidas de prevención con fines educativos<sup>105</sup>.

En cuanto al tema: “a partir de qué edad un menor puede responder penalmente de los actos que comete”, podemos encontrar diversas diferencias entre los países comunitarios de nuestro entorno<sup>106</sup>.

- En Suiza por ejemplo los menores pueden responder penalmente a partir de los siete años, país en el cual se diferencian dos franjas de edad distintas: de siete a catorce años donde las penas a imponer son más atenuadas que las que se pueden aplicar a la otra franja de edad que abarca de los quince a los dieciocho<sup>107</sup>.

En este sistema se apuesta claramente por medidas de carácter educativo antes de adoptar una medida de privación de libertad como sería el internamiento. Además,

---

<sup>105</sup> VÁZQUEZ GONZÁLEZ, *La Responsabilidad Penal de los Menores*, 2005, p. 3. Citado por ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2018, p. 23, disponible a 08/04/2020 en <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFM%20para%20el%20marco%20teórico.pdf>

<sup>106</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 23.

<sup>107</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 24.

cuentan con un sistema de recursos humanos suficientes para llevar a cabo estas finalidades preventivas-especiales<sup>108</sup>.

- En el caso de Francia se fija la edad a partir de la cual un menor responde penalmente en los trece años (un año menos que en la normativa española), pero sí permite que esos menores de trece años puedan responder civilmente ante los daños o responsabilidades que se les exijan<sup>109</sup>.

A diferencia de España, en Francia no cuentan con una normativa específica que regule la responsabilidad penal de los menores, sino que su solución al problema se basa en aplicar las mismas penas que se determinarían para los adultos con ciertas atenuaciones, por lo que podríamos concluir que este ordenamiento no podría asimilarse a los principios y objetivos que se pretenden en nuestro sistema penal juvenil.

- En Inglaterra al igual que en España cuentan con Juzgados de Menores especializados y la edad para responder penalmente se fija en los diez años hasta los diecisiete, pero en este caso los ingleses para que un menor responda penalmente por la comisión de un ilícito penal, se tiene que demostrar que en el momento de los hechos ese menor entendía y quería las consecuencias que este hecho podrían acarrearle. Es decir, que contaba con capacidad suficiente para ser consciente de que estaba “actuando mal”<sup>110</sup>.

Se produce también una división entre las edades a la hora de atender a unas medidas u otras (al igual que Alemania) y se distingue entre “niños”, “jóvenes” y “semi-adultos”. En el caso de los jóvenes se presume que tienen esa capacidad de querer y entender los hechos que llevan a cabo y en el caso de los semi-adultos procesalmente se les va a tratar igual que a los adultos<sup>111</sup>.

En cuanto “si los ordenamientos se basan en un criterio biológico o de discernimiento para determinar las edades que luego plasman en las distintas

---

<sup>108</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 24.

<sup>109</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 25.

<sup>110</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 25.

<sup>111</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 25.

legislaciones y a partir de las cuales los menores pueden responder penalmente”, debemos hacer alusión a lo siguiente<sup>112</sup>:

- En el caso de España junto con Portugal se ha determinado la responsabilidad del menor a partir de un criterio cronológico, es decir, fijar una edad biológica a partir de la cual, todo hecho que tenga lugar y que este tipificado como delito, será conocido por los tribunales con la finalidad de educar y redirigir la vida de ese menor.
- Alemania, Italia o Francia son países que han preferido establecer un sistema mixto donde atender tanto al criterio biológico, como al criterio del discernimiento del menor en el momento del ilícito. Por lo tanto, al contrario que en España, si los hechos denunciados son cometidos por un menor entre los catorce y los dieciocho años de edad, pero se demuestra que este no tenía capacidad suficiente para querer y entender esa situación, podría ser declarado inimputable y por ello que no responda ante los mismos<sup>113</sup>.

Para analizar o poder concluir que un menor no tiene capacidad suficiente, entran en juego múltiples factores a tener en cuenta como: la capacidad de entender valores éticos, la personalidad del menor, el desarrollo intelectual, la aptitud para distinguir el bien del mal, lo que a mi entender, en el caso de que únicamente se atendiera al criterio del discernimiento, dificultaría esa seguridad jurídica y certeza que también se busca en este ámbito de la justicia juvenil<sup>114</sup>.

En el caso francés, el menor será sometido a un examen tanto personal como de su entorno educativo, social y familiar, y a raíz de ahí el juez de forma motivada debe de adoptar la medida educativa o por el contrario si según su criterio dicho menor no tiene capacidad suficiente, declararlo inimputable<sup>115</sup>.

El inconveniente por tanto de aplicar este criterio de discernimiento (como criterio único) y como puede apreciarse, lo encontramos en el momento de determinar con plena seguridad que ese menor de verdad no entiende la realidad de los hechos

---

<sup>112</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 26.

<sup>113</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit. p. 27.

<sup>114</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit. p. 27.

<sup>115</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit. p. 27.



cometidos o, por el contrario, es plenamente consciente de lo sucedido, y de ahí la carencia de seguridad y certeza jurídica.

En cuanto al régimen sancionador también podemos dar con ciertas diferencias entre países como, por ejemplo, en nuestro caso, España, al igual que Alemania, contamos con un régimen de sanciones propio donde viene determinado por ley la duración que corresponde a cada medida que establezca el juez de menores a la hora de resolver cada caso<sup>116</sup>.

Es decir, no aplicamos las mismas penas que a los adultos como sería el caso de Inglaterra y Francia, que aplican las mismas consecuencias jurídicas, pero con cierta atenuación.

En mi opinión, así no se puede favorecer a una formación y socialización del menor con la que se busca evitar la reincidencia del mismo y que no se vea “atrapado” en cierto modo, a tener que vivir de por vida con la carga que supone ser condenado en un proceso penal y por consiguiente, ser estigmatizado como un delincuente.

## **ANEXO II – Medidas a imponer y reguladas en nuestra legislación en el ámbito penal de menores (art. 7 LORPM).**

Es necesario hacer mención de las medidas que se regulan en la ley para responsabilizar penalmente a los menores infractores. Estas aparecen expresamente reguladas en el art. 7 LORPM, las cuales siguen estando orientadas a ese fin preventivo-especial, a la reinserción del menor, a su socialización e interés; la medida finalmente adoptada por el juez a través de lo que establece en la sentencia para ser ejecutada, atiende a la edad de dicho menor, sus circunstancias, personalidad, y cuestiones relacionadas con todo el entorno en el que se encuentra el menor como ya hemos mencionado en más ocasiones.

La clasificación que podemos hacer con cada una de estas medidas es la siguiente:

- a. Como medidas de internamiento nos encontramos ante una medida de privación de libertad cuya finalidad es exactamente esta, que el menor este privado de libertad

---

<sup>116</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit. pp. 27 y 28.

durante el tiempo que se determine en la sentencia y que dicho internamiento se lleve a cabo en un centro adecuado y homologado por la Administración (aquí entraría la función de las Entidades públicas de las respectivas Comunidades Autónomas)<sup>117</sup>.

Dentro de las medidas de internamiento, encontramos cuatro tipos diferentes que pueden darse:

- **Internamiento en régimen cerrado (art. 7.1.a LORPM):** este tipo de internamiento es adoptado por el juez en aquellos casos en los que el menor haya llevado a cabo delitos graves con violencia e intimidación. El internamiento en régimen cerrado consiste en que el menor permanecerá residiendo en el centro y realizando en el mismo todas las actividades de carácter formativo y resocializador propias del centro, sin perjuicio de la enseñanza obligatoria si así es necesario o la formación profesional en el caso de menores a partir de los 16 años.
- **Internamiento en régimen semi-abierto (art. 7.1.b LORPM):** en este caso el menor residirá en el centro, pero a diferencia del régimen cerrado, podrán salir fuera de dicho centro para realizar algunas actividades formativas y laborales. Esto dependerá siempre del seguimiento que se lleve sobre el menor, su conducta y la evolución de la misma, y tras esta situación se le permitirá (cada vez en más ocasiones) al menor acudir a este tipo de actividades o todo lo contrario si el caso lo requiere, restringiéndolas o anulándolas en virtud de lo que estipule el juez de menores.
- **Internamiento en régimen abierto (art. 7.1.c LORPM):** en este caso el menor únicamente deberá de acudir al centro a pernoctar, el resto de las actividades y obligaciones las cumplirá en los respectivos centros autorizados para ello, bien sea su centro escolar, o su lugar de trabajo o de formación entre otros.
- **Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semi-abierto o abierto (art. 7.1.d LORPM):** con este tipo de internamientos se realizará una atención especializada y específica dirigida a esos menores a los que les impongan una

---

<sup>117</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit. p. 16.

medida de internamiento, pero padezcan de anomalías mentales o físicas o sean dependientes de bebidas alcohólicas o drogas y sustancias psicotrópicas. Por ello estos centros contarán con cierto personal técnico para poder llevar a cabo las finalidades de la medida.

Una vez se haya finalizado con el cumplimiento de la medida de internamiento en cualquiera de sus variables, se procede a establecer una medida de libertad vigilada en virtud del art. 7.2 de esta ley.

b. **Medidas de medio abierto:** cuando nos encontremos en el caso de que el juez haya impuesto alguna de las medidas pertenecientes a este grupo, puede darse que este imponga para su cumplimiento una o varias de las medidas previstas en este apartado<sup>118</sup>.

- **Tratamiento ambulatorio (art. 7.1.e LORPM):** el juez podrá aplicarla sola o como complemento a otra medida, como por ejemplo a la libertad vigilada como veíamos en el anterior apartado. Esta medida la podemos distinguir en dos tipos: el tratamiento psicológico en el caso de menores con alteraciones psíquicas o anomalías o como tratamiento ante todo tipo de adicciones y su consumo. Esta medida sobre todo se adopta ante aquellos delitos menos graves a diferencia de las medidas de internamiento antes mencionadas.
- **Asistencia en un centro de día (art. 7.1.f LORPM):** el menor tendría que acudir a este tipo de centros (y seguiría residiendo en su domicilio habitual) para cumplir y llevar a cabo en definitiva todo tipo de actividades de contenido educativo consideradas como beneficiosas para el menor y determinadas por el Juez.
- **Permanencia de fin de semana (art. 7.1.g LORPM):** podríamos considerarla como una medida de internamiento de corta duración, es decir, el menor debe estar obligatoriamente residiendo en el centro correspondiente un mínimo de treinta y seis horas (tarde/noche del viernes hasta la noche del domingo).
- **Libertad vigilada (art. 7.1.h LORPM):** suele ser la medida más usual y la que más establece el juez en aquellos delitos menos graves. Se trata de hacer un

---

<sup>118</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit. p. 17.

seguimiento de lo que sería el día a día del menor, es decir, si asiste al instituto o al trabajo en el caso de que tenga, por ejemplo.

Por la otra parte el menor también tendrá la obligación de colaborar con el profesional que lleve el seguimiento de su caso, proporcionándole toda la información que se le solicite y acudiendo a las entrevistas que se establezcan, donde dicho profesional podrá corroborar si el menor cumple con lo establecido por el juez en la sentencia<sup>119</sup>.

- **Convivencia con otras personas o familias/grupos educativos (art. 7.1.j LORPM):** esta medida tiene como finalidad que el menor durante un tiempo establecido por el juez en la sentencia, conviva con una familia que no es la suya o en un centro/entidad convenida para ello.
  - **Prestaciones en beneficio de la comunidad (art. 7.1.k LORPM):** para imponer esta medida es necesario que el menor infractor consienta en llevar a cabo este tipo de actividades benéficas o en beneficio de la sociedad o de determinadas personas. El juez suele determinar actividades que lleguen a tener relación con el hecho cometido por el menor<sup>120</sup>.
  - **Realización de tareas socio-educativas (art.7.1.l LORPM):** en el caso de delitos de escasa entidad donde al menor se le impone realizar una serie de actividades de contenido educativo (alfabetización, refuerzo escolar, etc.).
- c. **Medidas de ejecución directa por el juez (art. 7.1.i, m,n LORPM):** entre las que podemos encontrar la prohibición de aproximarse a la víctima o gente cercana a la misma (determinadas de manera expresa por el juez), la amonestación para hacer entender al menor de la entidad de los hechos que ha cometido y sus consecuencias o la privación de la tenencia de armas o cualquier permiso para conducir vehículos a motor, junto con la inhabilitación absoluta.

---

<sup>119</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 18.

<sup>120</sup> ABAD DE LA FUENTE, C., *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors*, cit., p. 19.

### **ANEXO III – Lista de elementos para la evaluación del interés superior del menor.**

1. **La edad y madurez del niño:** que las decisiones se adapten a la evolución futura y a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias por parte del niño en el tiempo, no teniendo en cuenta solo el momento inmediato de la toma de la decisión y por ello tener abierta la posibilidad de revisión de las medidas adoptadas<sup>121</sup>.
2. **La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación:** teniendo una especial consideración con estos menores en situaciones de una mayor vulnerabilidad y no discriminar a los mismos precisamente por ello. Garantizar de manera efectiva a todos por igual, la posibilidad de disfrutar de todos aquellos derechos que se les otorga y reconoce en la Convención, sin perjuicio de otras normas de derechos humanos relacionados con este tipo de situaciones más concretas en el ámbito de los menores como: la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento EU y el Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales o la Observación general nº 10 del Comité sobre los Derechos del Niño, de 25 de abril de 1997, sobre los derechos del niño en la justicia de menores y el art. 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea<sup>122</sup>.

Habrà que atender a cada niño bajo sus circunstancias, ya que no todos van a necesitar o requerir las mismas actuaciones: en el caso de las niñas (superar los valores patriarcales y estereotipos de género), niños con discapacidad, niños en procedimiento de migración o asilo, adolescentes, etc.
3. **El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo:** tener en cuenta el proceso de evolución y aprendizaje a través del cual estos menores adquieren una serie de competencias, comprensión y mayores niveles de autonomía para asumir sus responsabilidades y poder hacer uso de sus derechos<sup>123</sup>.
4. **La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño, así como de minimizar los riesgos que**

---

<sup>121</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 10.

<sup>122</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 12.

<sup>123</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 14.

**cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro**<sup>124</sup>.

5. **La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales:** atendiendo este periodo de entre los catorce años a los dieciocho, como un periodo de transición por el que el menor tiene que pasar y lo tiene que hacer de una manera adecuada<sup>125</sup>.
6. **La opinión del niño:** art. 12 de la Convención hace referencia a este derecho que tiene el menor a poder expresarse, siempre contando con la información suficiente y adecuada a su situación y de ahí crear un juicio propio al respecto<sup>126</sup>.
7. **La identidad del niño:** atendiendo a este concepto y entendiéndolo como algo muy amplio: identidad religiosa o cultural, origen, creencias, orientación sexual, sexo<sup>127</sup>.
8. **La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones personales:** que el menor se encuentre en un entorno seguro, libre de violencia, e intentando (dentro de lo posible) que el menor siga manteniendo el contacto con el entorno familiar<sup>128</sup>.
9. **El cuidado, protección y seguridad del niño:** haciendo referencia al cuidado emocional, a su desarrollo, a su bienestar psicosocial<sup>129</sup>.
10. **El derecho del niño a la salud, a la educación y aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los niños**<sup>130</sup>.

---

<sup>124</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 15.

<sup>125</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 16.

<sup>126</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 17.

<sup>127</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 18.

<sup>128</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 19.

<sup>129</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, p. 20.

<sup>130</sup> MARTINEZ GARCÍA, C. y DEL MORAL BLASCO, C., “Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor”, *cit.*, pp. 21 a 24.

Para cerrar este apartado, hay que añadir que esta lista no es *numerus clausus*, sino que si se demuestra o existe cualquier otra circunstancia a la cual haya que darle importancia o deba tenerse en cuenta en la decisión, debe ser objeto de evaluación y posterior determinación dentro de un proceso con todas las garantías.

#### **ANEXO IV – Origen e inicios de la Justicia restaurativa.**

El inicio de lo que hoy conocemos por Justicia restaurativa tendríamos que situarlo en el 1959, año en el que se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño en la que se recogen una serie de principios que posteriormente citaremos, los cuales tienen su origen en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, donde se reconocían y se afirmaba la existencia de derechos para los mismos<sup>131</sup>.

La idea principal de esta Declaración tiene su razón de ser en la necesidad de protección y cuidado que requieren los niños, tal y como cita en su preámbulo la Convención de Derechos del niño de 1989: “*antes y después del nacimiento*”.

A continuación, tenemos que pasar a hablar de la Convención de los Derechos del Niño y su modelo de justicia para adolescentes. Esta se firma en el año 1989 y es considerado como el primer instrumento internacional de cumplimiento obligatorio para todos los Estados y en este, se les reconoce a los niños y niñas como titulares de derechos; aquí debemos hacer una especial mención al art. 40 de dicha Convención donde se mencionan los principios relacionados con la Justicia restaurativa de menores<sup>132</sup>.

Vamos a pasar a clasificar los diferentes textos normativos en relación con el reconocimiento de los derechos del niño y de igual manera, esto nos permitirá hacer un análisis de los instrumentos internacionales que hacen referencia a la Justicia Restaurativa.

En cuando a los textos internacionales:

- a. El primero de ellos al que tenemos que hacer mención es a la **Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal** (Resolución 2000/14 del Consejo Económico

---

<sup>131</sup> FRANCO MÚÑOZ, E.M., “Capítulo IV: Aportaciones al sistema ecuatoriano de Justicia Restaurativa de menores, desde la perspectiva del Derecho internacional y comparado”, *Reflexiones en torno a la Justicia restaurativa en el ámbito del menor infractor*, Ed. Dykinson, Madrid, 2019, p. 168.

<sup>132</sup> FRANCO MÚÑOZ, E.M., “Capítulo IV: Aportaciones al sistema ecuatoriano de Justicia Restaurativa de menores, desde la perspectiva del Derecho internacional y comparado”, *cit.*, p. 168.

y Social, modificado por el Grupo de Expertos sobre Justicia Restaurativa de 7 de enero de 2002) donde se define la Justicia restaurativa como: *“una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, delincuentes y las comunidades”*.

- b. No obstante, la ONU no es el único organismo que ha tratado de establecer un concepto de Justicia restaurativa, las **Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)** adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985, establecen varias orientaciones para los Estados con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de los menores y de igual manera proteger sus necesidades.

Es decir, en este texto el objetivo de la ONU es establecer unas medidas mínimas que regulen la Administración de Justicia en el ámbito de los menores, además de intentar favorecer el bienestar de los mismos y asegurar que el tratamiento que vayan a recibir aquellos menores que incurran en actos de delincuencia, sea proporcional teniendo en cuenta tanto sus circunstancias (las del menor y el entorno que rodea al mismo), como el delito cometido<sup>133</sup>.

Debemos hacer mención a que estas reglas y lo regulado en ellas no es vinculante para los Estados, sino que son meras recomendaciones entre las que podemos señalar, por ejemplo, que se da una especial importancia a que el ingreso del menor infractor en las instituciones tiene que ser por el menor tiempo posible, siempre con opción a poder acceder a la libertad o a realizar trabajos o servicios a la comunidad (a modo de sustitución), y como último recurso: *“Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada*

---

<sup>133</sup> FRANCO MUÑOZ, E. M., “Capítulo IV: Aportaciones al sistema ecuatoriano de Justicia Restaurativa de menores, desde la perspectiva del Derecho internacional y comparado”, *cit.*, p. 156.



*por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo”<sup>134</sup>.*

- c. **Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)**, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990. Este documento tiene como finalidad principal que la comunidad, refiriéndonos a la sociedad como tal, participe en la gestión de la justicia penal y se busca establecer una serie de medidas alternativas a las medidas privativas de libertad (art. 2 sobre el alcance de las medidas no privativas de la libertad, apartado 3).
- d. **Directrices de Riad, de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil** adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, donde tratan de evitar que ese menor, el cual no ha llevado a cabo una conducta considerada como grave, se pueda evitar esa estigmatización y penalización que conlleva pasar por un proceso penal.

En cuanto a la normativa europea relativa a la justicia de menores y la aplicación de la Justicia restaurativa, nos encontramos con las siguientes Recomendaciones y Declaraciones<sup>135</sup>:

- a. **Recomendación No. R (83) 7, de 23 de junio de 1983, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre la participación del público en la política penal**, donde se busca crear una conciencia colectiva, adoptar unas reglas de conducta determinada y focalizar la importancia en la indemnización de la víctima por parte del delincuente como medida sustitutiva a la privación de libertad.
- b. **Recomendación No. R (85) 11, de 28 de junio de 1985, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal**, donde se exponen las ventajas de poner en práctica los sistemas de mediación y conciliación, como métodos dentro de la Justicia restaurativa.

---

<sup>134</sup> FRANCO MUÑOZ, E. M., “Capítulo IV: Aportaciones al sistema ecuatoriano de Justicia Restaurativa de menores, desde la perspectiva del Derecho internacional y comparado”, *cit.*, p. 158.

<sup>135</sup> FRANCO MUÑOZ, E. M., “Capítulo IV: Aportaciones al sistema ecuatoriano de Justicia Restaurativa de menores, desde la perspectiva del Derecho internacional y comparado”, *cit.*, p. 159.

- c. **Recomendación R (2006) 8, de 14 de junio de 2006, del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre asistencia a las víctimas de delitos**, en relación con las reacciones de la sociedad ante la delincuencia juvenil, la asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización. De igual manera, la recomendación pasa a regular acciones concretas a favor de las víctimas como es la mediación.
- d. **Recomendación CM/Rec (2018) 8, de 3 de octubre de 2018, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre Justicia restaurativa penal**, referida a la mediación en materia penal y pasando a convertirse dicha normativa en uno de los principales pilares en los que se ampara la Justicia restaurativa. Lo más importante a señalar de esta recomendación es que pretende que la mediación adquiera suficiente autonomía dentro del sistema de justicia penal.
- e. Por último, hacemos mención a la **Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012**, establece unas normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas del delito. Debemos mencionar que en el art. 12 de esta Directiva se desarrolla el derecho a garantizar los servicios de Justicia restaurativa y se describen las garantías que deben de cumplir dichos métodos de Justicia restaurativa para que la víctima del conflicto esté segura durante el desarrollo de estos procedimientos: mediación, reparación, conciliación.

Atendiendo a lo establecido en la undécima sesión de la **Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas**, celebrado en Viena en 2002, podemos desarrollar la Justicia restaurativa a través de una serie de puntos<sup>136</sup>:

- a. **Reparación de los daños producidos por el delito**: otorgando una especial importancia a la figura de la víctima, a sus emociones, a lo que realmente le va a compensar esa pérdida bien sea material, económica o emocional, por lo que a través de la comunicación entre las partes se trabaja en reparar las relaciones destruidas y la curación de los daños provocados por el delito<sup>137</sup>.

---

<sup>136</sup> YANI, X., “Capítulo V: Una propuesta de integración de la Justicia Restaurativa de menores en China”, *Reflexiones en torno a la Justicia restaurativa en el ámbito del menor infractor*, Ed. Dykinson, Madrid, 2019, p. 189.

<sup>137</sup> YANI, X., “Capítulo V: Una propuesta de integración de la Justicia Restaurativa de menores en China”, *cit.*, p. 189.

- b. **Participación y negociación plenas:** la Justicia restaurativa propone e impulsa la participación activa y conjunta de las partes involucradas en el conflicto con la finalidad de resolverlo. Durante este tipo de procedimientos como métodos alternativos a la resolución de conflictos, las partes intercambian puntos de vista, trabajan por empatizar con la contraparte, entenderse y llegar a encontrar medios para resolver el problema de la manera más adecuada y satisfactoria posible para las mismas<sup>138</sup>.
- c. **Integración de la división para fortalecer la comunidad:** tanto el menor infractor, como la víctima o perjudicado deben tener la posibilidad de poder liberarse de esa situación, la cual ha generado el conflicto, y por ello se ha de encontrar la manera de compensar esa situación de manera inmediata y efectiva y esto a su vez provoca una mayor armonía y seguridad, además de tranquilidad en la sociedad y facilita el control y la prevención efectiva de estas conductas<sup>139</sup>.

#### **ANEXO V – Gráfica representativa de la delincuencia juvenil <sup>140</sup>.**

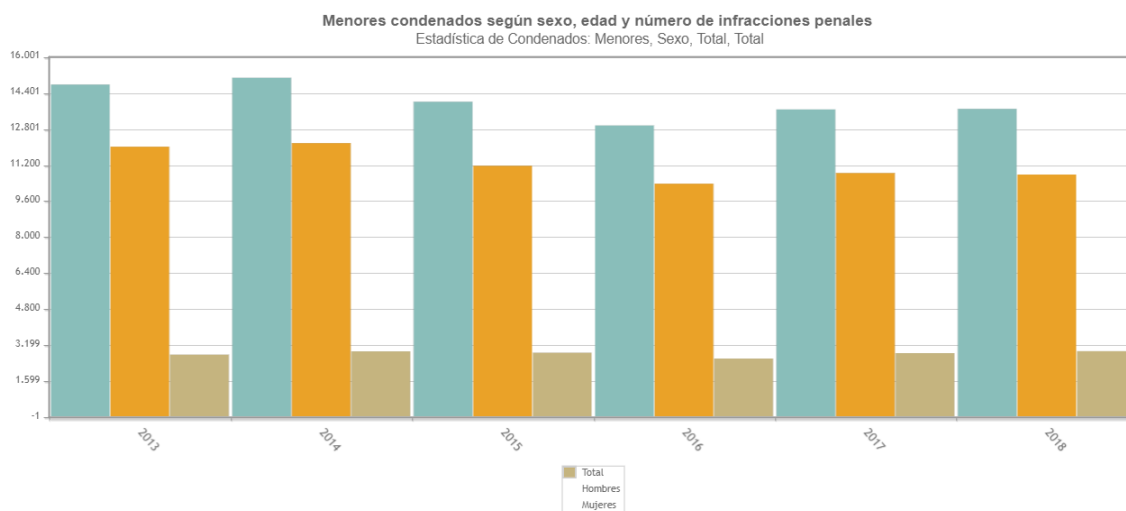
Con los datos proporcionados por el INE, (Instituto Nacional de Estadística) podemos corroborar como entre los años 2013 a 2018, a modo de ejemplo y como muestra de que con datos oficiales (basados en datos objetivos y reales) se demuestra que la delincuencia juvenil no está aumentando en la actualidad, sino todo lo contrario.

---

<sup>138</sup> YANI, X., “Capítulo V: Una propuesta de integración de la Justicia Restaurativa de menores en China”, *cit.*, pp. 189 y 190.

<sup>139</sup> YANI, X., “Capítulo V: Una propuesta de integración de la Justicia Restaurativa de menores en China”, *cit.*, pp. 190 y 191.

<sup>140</sup> Instituto Nacional de Estadística, gráfica de menores condenados según sexo, edad y número de infracciones penales. Disponible a 11 de junio de 2020 en <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25722#!tabs-grafico>



## ANEXO VI - Papel de la víctima en el proceso penal de menores en España.

En este ámbito del derecho penal de menores, sin pasar por alto uno de sus pilares fundamentales que es atender y valorar ese interés del menor, perfectamente puede armonizarse con los que han sufrido las consecuencias del hecho delictivo y SANZ HERMIDA afirma que “*en la actualidad se reinicia la tendencia de otorgar una mayor relevancia a las víctimas en estos aspectos mediante diversos mecanismos*”<sup>141</sup>. Aquí podríamos recurrir a la intervención de la misma mediante los mecanismos de conciliación y reparación con la finalidad de satisfacer de una manera más efectiva y eficaz sus intereses.

La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal considera la necesidad de atender también a los intereses de la víctima en lo que respecta al procedimiento penal en sentido estricto, a la vez de considerar la necesidad de facilitarle otras formas de asistencia antes, durante y después del proceso penal, que ayuden a la búsqueda de esa satisfacción personal<sup>142</sup>.

<sup>141</sup> SANZ HERMIDA, Á., “La Responsabilidad Penal de los Menores en Derecho español”, *Revue internationale de droit pénal* (Vol 75), 2004, p. 301.

<sup>142</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., pp. 489 y 490.

En la normativa actual vigente contamos con una enumeración de todos los derechos que asisten a los ofendidos y perjudicados en el proceso en virtud del art. 4, el cual nace a raíz de la LO 8/2006, modificando el texto original de la LO 5/2000.

Del mismo modo se les otorga un especial interés a las figuras de la conciliación o reparación y su razón de ser la encontramos en la manera en la que estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos contribuyen a esa finalidad educativa tan importante en el ámbito de la justicia de menores, además de demostrar en la práctica ese principio de *ultima ratio* e intervención mínima que debe caracterizar al derecho penal<sup>143</sup>.

Como bien señala CORCOY BIDASOLO: *“es indiscutible que las víctimas deben ser atendidas y protegidas de forma que, en ningún caso, el proceso pueda significar para ellas una nueva victimización. De la misma forma es indiscutible que hay que adoptar las medidas necesarias para que las víctimas sean resarcidas por los perjuicios sufridos, incluidos los daños morales. No obstante, en ningún caso puede aceptarse que existan unos presuntos derechos de las víctimas que puedan conducir a sustituir las finalidades educativas, por la de retribución: debe rechazarse la idea de venganza, lo que supondría romper todos los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño”*<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup> CRUS Y CRUS, E., *Los menores de edad infractores de la Ley penal* (Tesis doctoral), cit., p. 492.

<sup>144</sup> CORCOY BIDASOLO, M., “Responsabilidad penal de los menores. En particular, disfunciones en supuestos de participación delictiva conjuntamente con adultos”. Citado por SOLA RECHE, E. *Derecho penal y psicología del menor*. Ed. Comares, Centro de Estudios Criminológicos, Universidad de la La Laguna, Granada, España, 2007, p. 282.

## BIBLIOGRAFÍA

- ABAD DE LA FUENTE, C. (2018). *La responsabilidad penal del menor/Criminal responsibility of minors (Trabajo Fin de Máster)*. Universidad de Alcalá de Henares. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFM%20para%20el%20marco%20teórico.pdf
- AGUILERA ROJAS, M. (2017). *Mediación y Conciliación en la Justicia Penal Juvenil (Trabajo de Fin de Grado)*. Universidad de Jaén. Obtenido de <http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/7183/1/TFG.pdf>
- ÁLVAREZ RAMOS, F. (2008). "La mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales". *Internacional E-Journal of Criminal Sciences*, 8, 10, 13, 15 y 17.
- COLÁS TUREGANO, A. (2011). *Derecho Penal de Menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- COLÁS TURÉGANO, A. (2015). "Hacia una humanización de la Justicia Penal: La Mediación en la Justicia Juvenil española. Principios y ámbito aplicativo en la LO 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad penal de los menores". *Revista Boliviana de Derecho*, 162.
- CRUS Y CRUS, E. (2010). *Los menores de edad infractores de la Ley penal (Tesis doctoral)*. Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/11218/1/T32137.pdf>
- DE URBANO CASTRILLO, E., & DE LA ROSA CORTINA, J. (2001). *Comentarios a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor*. Navarra: Aranzadi Editorial.
- DEL CAMPO SORRIBAS, J., VILÁ BAÑOS, R., BARBERAN MARTÍ, J., & VINUESA CASAS, M. (2006). "La mediación con jóvenes inmigrantes en el ámbito de la justicia penal juvenil: un enfoque educativo". *Revista de Investigación Educativa*, 48.
- FERREIRÓS MARCO, C., SIRVENT BOTELLA, A., SIMONS VALLEJO, R., & AMANTE GARCIA, C. (2011). *"La mediación en el Derecho Penal de Menores" (Edición 1)*. Madrid: Monografías Dykinson.

- FRANCÉS LECUMBERRI, P. (2012). "El principio de oportunidad y la justicia restaurativa". *Revista para el análisis del derecho (InDret)*, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 30, 31, 32 y 34.
- FRANCÉS LECUMBERRI, P., & SANTOS ITOIZ, E. (2010). "La medida penal, ¿un modelo de justicia restaurativa en el sistema de justicia penal?". *Nuevo foro penal No. 75, julio - diciembre, Universidad EAFIT*, 63.
- FRANCO MUÑOZ, E. (2019). "Capítulo IV: Aportaciones al sistema ecuatoriano de Justicia Restaurativa de menores, desde la perspectiva del Derecho internacional y comparado". *Reflexiones en torno a la Justicia restaurativa en el ámbito del menor infractor*, 156, 158 y 159.
- GARCÍA PÉREZ, O. (2011). "La mediación en el sistema español de Justicia penal de menores". Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3870697.pdf>
- GARMEDIA LOYARTE, E. (2019). "Mediación penal juvenil". *Revista científica DOCRIM*, 27 y 28.
- JIMÉNEZ LAÍNEZ, C. (2014). *Evolución legislativa de la responsabilidad penal del menor (Trabajo de Fin de Grado de Derecho)*. Universidad Pública de Navarra. Obtenido de <https://academica-e.unavarra.es/xmlui/bitstream/handle/2454/11241/jimenez72153.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- MARTÍNEZ GARCÍA, C., & DEL MORAL BLASCO, C. (2017). "Guía para la evaluación y determinación del interés superior del menor". Obtenido de <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/INTERÉS%20SUPERIOR%20DEL%20MENOR.pdf>
- MIR PUIG, S. (2006). *Derecho Penal. Parte General, 8ª Edición*. Barcelona: Ed. Reppertor.
- MOLINA LÓPEZ, R. (2009). "El principio de oportunidad en el proceso penal de menores". *Nuevo Foro Penal*, No 72, 67-68.
- MONTAÑÉS PARDO, M. (2001). *Las garantías constitucionales del proceso penal: el principio acusatorio*. Pamplona: Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional

21/2001. Obtenido de <https://es.slideshare.net/lancadiz/las-garantias-constitucionales-del-proceso-penal-el-principio-acusatorio-1>

NOGUEIRA GANDÁSTEGUI, S. (2003). "Observaciones críticas al proceso penal de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad de Menores". *En Anuario de Justicia de Menores, No. III. Ed Astigi*, 144 , 145 .

OLAIZOLA NOGALES, I. (2013). "La medida de internamiento en régimen cerrado en la LORPM, ¿estamos ante un Derecho penal de seguridad?". *Revista penal nº 31*, 193.

PALOMINO ORTEGA, A. (s.f.). *La Mediación Penal Juvenil (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Valladolid, Campus María Zambrano, Segovia*. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFM%20Valladolid%20-%20Mediaci%C3%B3n%20(II).pdf

PAREDES CASTAÑÓN, J. (2013). "El principio del interés del menor en derecho penal: Una visión crítica". *Revista de derecho penal y criminología*, 158, 161, 163, 175 y 182.

RÍOS MARTIN, J., MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., SEGOVIA BERNABÉ , J., GALLEGÓ DÍAZ, M., CABRERA, P., & JIMÉNEZ ARBELO, M. ((2005 - 2008)). *Justicia restaurativa y Mediación penal. Análisis de una experiencia*. Obtenido de C:\Users\Usuario\Desktop\TFG\Investigación del CGPJ 2008 2b (2)\_1.0.0 (3).pdf

RIVERO HERNÁNDEZ, F. (2007). *El interés del menor (2ª Edición)*. Madrid: Editorial Dykinson.

RUIZ CERMEÑO, I. (2018). *La Mediación en el ámbito de la Justicia Penal de Menores (Trabajo de Fin de Máster). Universidad de Valladolid, Campus María Zambrano, Segovia*. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/TFM%20Valladolid%20-%20Mediación.pdf

SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M. (2018). "La mediación en el proceso español de menores a la luz de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores". *laleydigital*360, 2.



- SANCHEZ MATA, V. (2001). "Reparación extrajudicial del daño en el ámbito del derecho penal de menores", núm. 15. *Eguzkilore (San Sebastián)*, 157 y 158.
- SANCHO VERDUGO, R. (2004). "Consideraciones criminológicas sobre la Ley Orgánica N.5, de 12 de enero de 2000, reguladora de la Responsabilidad penal de los menores". *En Anuario de Justicia de Menores, Ed. Astigi (No. IV)*, 82,83 y 84.
- SANZ HERMIDA, Á. (2001). "La víctima en el proceso penal de menores". *En Anuario de Justicia de Menores, No. I. Ed. Astigi*, 200 .
- SANZ HERMIDA, Á. (2004). "La Responsabilidad Penal de los Menores en Derecho español". *Revue internationale de droit pénal (Vol. 75)*, 301.
- SOLA RECHE, E. (2007). *Derecho penal y psicología del menor. Ed Comares (Centro de Estudios Criminológicos). Universidad de la La Laguna, Granada*. Obtenido de <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/PDF%20Doctorado%20de%20la%20complutense.pdf>
- UNICEF, *Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial*. (s.f.). Obtenido de <https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf>
- VARONA MARTINEZ, G. (1998). *La mediación reparadora como estrategia de control social. Una nueva perspectiva criminológica* . Granada: Ed. Comares.
- XUE, Y. (2019). "Una propuesta de integración de la Justicia Restaurativa de menores en China". En H. SOLETO, *Reflexiones en torno a la Justicia restaurativa en el ámbito del menor infractor* (pág. 189 y 190). Madrid: Dykinson.

## **Legislación**

Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder judicial, *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, 2 de julio de 1985, núm. 157.

Ley Orgánica 1/1996, de 16 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid 17 de enero de 1996, núm. 15.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad penal del menor. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, 13 de enero de 2000, núm. 11.

Ley Orgánica 7/2000 de 22 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, de 23 de diciembre de 2000, núm. 307.

Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, de 5 de diciembre de 2006, núm. 290.

Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, 30 de julio de 2004, núm. 209.

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, *Diario oficial de la Unión Europea* de 14 de noviembre de 2012, núm. 315.

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, de 31 de diciembre de 1990, núm. 313.

### **Otros documentos consultados**

Memoria de la Fiscalía General del Estado (Volumen 1), Madrid 2014.

Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, 18 de diciembre de 2000, ref: FIS-C-2000-00001.

Resolución 2000/14 del Consejo Económico y Social, modificado por el Grupo de Expertos sobre Justicia Restaurativa de 7 de enero de 2002.

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990.

Directrices de Riad, de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985.

Recomendación No. R (83) 7, de 23 de junio de 1983, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre la participación del público en la política penal.

Recomendación No. R (85) 11, de 28 de junio de 1985, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal.

Recomendación R (2006) 8, de 14 de junio de 2006, del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre asistencia a las víctimas de delitos.

Recomendación CM/Rec (2018) 8, de 3 de octubre de 2018, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre Justicia restaurativa penal.

Instituto Nacional de Estadística (INE), gráfico disponible a 11 de junio de 2020. Menores condenados según sexo, edad y número de infracciones penales.